

32ª REUNION — 30ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser y Carlos A. Pita

MINISTRO PRESENTE:

de Agricultura,
Ingeniero José Padilla;

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguar, Henoch D.
Aguirre Cámara, José
Agulla, Juan Carlos
Alperin, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Arbeletche, Anibal P.
Arias Uriburu, Juan
Astesiano, Carmelo I.
Barceló, Alberto
Barrau, José
Barriouuevo, Gerardo
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Beristain, Francisco
Boatti, Ernesto C.
Busaniche, Julio A.
Busignani, Mario
Cabral, Humberto
Cafferata, Juan F.
Cantilo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Courrel, Carlos D.
De Miguel, Benito
Díaz, Raul
Dickmann, Enrique
Eberlé, Enrique
Eyto, Francisco F.

Fassi, Santiago Carlos
Fazio Rojas, Lorenzo
Figueroa, Julio A.
Garona, Juan A.
Godoy, Raúl
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamín S.
Grassi, Alfredo
Grisolia, Luis
Güerci, José María
Guerrero, José Rafael
Guglielmelli, Aquiles M.
Guillot, Victor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Hernández, Victorio
Horne, Bernardino
Illanes, Moy J.
Infante, Faustino
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Izurieta Fourquet, Agustín
Jaramillo, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Labayen, Juan
Lanús, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lezica Alvear, Florencio
Lima, Vicente Solano
López, Hector S.
López García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Martínez, F. Benigno
Martínez, Gregorio N.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos P.

Moreno, Ricardo A.
Morrogh Bernard, Juan F.
Mugica, Adolfo
Munilagurria, Walter Julio
Noel, Martín
Onsari, Fabián
O'Reilly, Guillermo R.
Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osore Soler, Manuel E.
Osorio, Miguel
Pagano, David J.
Palacio, Benjamín
Pandolfo, Pío
Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Paz Posse, Ramón D.
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Peña, Solano
Pérez, Deolindo
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Pizarro, Néstor A.
Prat Gay, Fernando de
Quintana, Fenelón
Radio, Pedro
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Revna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Sacccone, Romeo D.
Sáenz, Mario
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez, Julián
Sánchez, Adolfo B.
Schoo Lastra, Dionisio
Simón Padrós, J.
Solá, Juan E.

Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquimedes A. E.
Solís, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Tapia, Numa
Teisairé, Eduardo (h.)
Vásquez, Juan Carlos
Vélez, Francisco M.
Videla Dorna, Daniel
Vilchez, Martín
Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Alsina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Biancofiore, Rafael
Boero, Albino
Castro Frediani, Manuel L.
Damonte Taborda, Raúl
Duffy, Eduardo N.
Ferreira, Antenor R.
Ghioldi, Américo
Gómez Grandoli, Clemente
Martínez, Manuel
Noel, Carlos M.
Piedrahueña, Carmelo P.
Siri, Obdulio F.
Urlien, Enrique César
Vilgré La Madrid, Juan

AUSENTES, SIN AVISO:

Bertotto, José G.
Carús, Agustín J.
Devoto Acosta, Alcibiades
Medina, Justo G.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley, del Poder Ejecutivo, sobre aprobación del convenio relacionado con el tráfico de pequeñas

cantidades de frutos o productos destinados al abastecimiento de las zonas fronterizas, subscripto con la República del Paraguay.

- II.—Comunicaciones oficiales.
- III.—Despachos de comisión.
- IV.—Peticiones particulares.
- V.—Proyecto de ley, del señor diputado López García, sobre creación de una escuela prác-

tica de oficios rurales en La Cocha, departamento Graneros (Tucumán).

- VI.—Proyecto de ley, del señor diputado Amadeo y Videla (h.), sobre subsidio a la Comisión pro sala de primeros auxilios de Huanguelén (Buenos Aires).
- VII.—Proyecto de ley, del señor Amadeo y Videla (h.), sobre instalación del Tiro Federal de Coronel Suárez (Buenos Aires).
- VIII.—Proyecto de ley, de los señores diputados Irigoyen y Horne, sobre pavimentación del camino que va desde Gualaguay hasta puerto Ruiz (Entre Ríos).
- IX.—Proyecto de ley, del señor diputado Busaniche, sobre subsidio a la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe, para la adquisición e instalación de un equipo moderno de rayos X en el hospital Carade, de Santa Fe.
- X.—Proyecto de ley, del señor diputado Beristain y otros, sobre exención del pago de derechos aduaneros y sus adicionales para todos los materiales que introduzca la Empresa Municipal Mixta de Transportes, de Rosario.
- XI.—Proyecto de ley, del señor diputado Gómez Rincón y otros, sobre habilitación de una oficina telegráfica en Anta (Salta).
- XII.—Proyecto de ley, del señor diputado Devoto Acosta y otros, sobre coordinación del impuesto a la herencia en todo el país.
- XIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Moreno y otros, sobre creación de un impuesto de 5 % sobre el valor de venta al público de los billetes de la Lotería Nacional.
- XIV.—Proyecto de ley, del señor diputado Araujo y otros, sobre creación de la caja de jubilaciones y pensiones para empleados del comercio, de la industria y de las actividades civiles.
- XV.—Proyecto de ley, del señor diputado Muniagurria, sobre creación de una escuela técnica de lechería e industrias afines, en Rafaela (Santa Fe).
- XVI.—Proyecto de ley, del señor diputado Agulla, sobre pensión a la señora Ana de Goycochea de Saravia.
- XVII.—Proyecto de ley, del señor diputado Basualdo, creando una oficina mixta de Correos y Telégrafos en la localidad de Villa Mercedes, Jachal (San Juan).
- XVIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Pandolfo y otros, sobre construcción y refeción de pabellones en el Instituto Penna.

XIX.—Proyecto de ley, del señor diputado Videla Dorna, sobre pensión a la señora Luisa Madero de Martínez de Hoz.

- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados Castro Frediani, Piedrabuena, Alsina y Biancofiore.
- 5.—Indicación, del señor diputado Dickmann, para que se autorice a la Presidencia a designar los miembros de la Comisión Investigadora de la Industria Textil. Es aprobada.
- 6.—Moción, del señor diputado Solari (J. A.), para considerar sobre tablas el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre subsidio a la Federación Argentina de Asociaciones de Maestros para gastos de envío de delegados al I Congreso Internacional Americano de Maestros, a realizarse en La Habana. Es aprobada.
- 7.—Se considera y aprueba el asunto a que se refiere el número anterior.
- 8.—Designación de comisión.
- 9.—Indicación, del señor diputado Muniagurria, acerca del estudio del proyecto de ley sobre creación de una maternidad en el hospital Salaberry. Es aprobada.
- 10.—Indicación, del señor diputado Repetto, sobre pronto envío de los informes solicitados al Poder Ejecutivo, relacionados con la red oficial de elevadores y la introducción de arroz.
- 11.—Termina la consideración del proyecto de ley, del señor diputado Guglielmelli, sobre caducidad del convenio entre las empresas y el personal ferroviario.
- 12.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre creación del consejo nacional de colonización.

—En Buenos Aires, a veinticuatro días del mes de agosto del año 1939, siendo la hora 15 y 28:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Eyto. — Hago indicación para que se espere un cuarto de hora.

Sr. Presidente (Kaiser). — Si hubiera asentimiento, se esperará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el autor del proyecto.

Sr. Guglielmelli. — Tiene por objeto que las empresas, con la conformidad del Poder Ejecutivo, puedan realizar un reajuste de acuerdo con la situación.

Sr. Dickmann. — La explicación del autor del proyecto no puede satisfacerme. Si las empresas pueden hacer economías que no se refieran al personal, no hay por qué facultarlas por ley. La redacción de este artículo es oscura y por eso no sé si contendrá algo que no percibimos.

Sr. Solana. — No, señor diputado; es simplemente un artículo redundante.

Sr. Ruggieri. — Es un artículo completamente redundante.

Sr. Ravignani. — Creo que este artículo, tal como está redactado, es un arma peligrosa...

Sr. Dickmann. — Así es.

Sr. Ravignani. — ...porque en determinado momento puede significar aminorar los gastos indispensables...

Sr. Dickmann. — Supresión de trenes, alteración de horarios...

Sr. Ravignani. — ...y afectar todo el ciclo industrial de las empresas.

Sr. Boatti. — Pido la palabra.

El artículo tal como está redactado carece de objeto —perdóneme el autor del proyecto— porque las facultades que tiene la Dirección General de Ferrocarriles, de acuerdo con las leyes en vigencia, permiten realizar lo que en ese artículo se dispone. Si acaso no fuera esa la intención, coincido con lo que acaba de manifestar el señor diputado por la Capital.

Sr. Guglielmelli. — Es una refirmación de las facultades del Poder Ejecutivo.

Sr. Boatti. — Está consignado eso en la ley general de ferrocarriles y no hay necesidad de refirmarlo. Si lo que se quiere significar es que el sistema actual de explotación de los ferrocarriles es susceptible de modificaciones, no se podría hacerlo por este artículo: habría que revisar las leyes fundamentales que rigen la explotación de los ferrocarriles. No es con un artículo accidental que eso se logrará. Algún día la Cámara tendrá que afrontar a fondo la situación para colocar a los ferrocarriles en las condiciones que en la actualidad exige la industria ferroviaria.

Oportunamente he de traer a esta Cámara en ese sentido algunas iniciativas que quizá

permitan ese estudio con las modificaciones que la Cámara quiera introducirle para que en esa forma, como he dicho, no quede abierto un camino que podría ser perjudicial a la regularización y mejor servicio de esta clase de transporte.

Sr. Guglielmelli. — Siempre entendiendo que el Poder Ejecutivo no supiera cumplir con su deber. Es una refirmación de facultades expresas que conviene fijarla, a mi juicio, en la ley para evitar posibles abusos de las empresas.

Sr. Lazo. — Si bien es cierto que la mayoría de la Cámara no ha podido escuchar el pensamiento que inspirara a los oradores que han hablado, de acuerdo al criterio del autor de la iniciativa, de lo que se ha podido percibir de las exposiciones escuchadas, sería más conveniente que el señor diputado retirara el artículo para que en esa forma la Cámara pudiera dar tranquilamente un voto a conciencia.

Sr. Sammartino. — El autor del proyecto ha dicho que se trata de una refirmación de las facultades que tiene la Dirección de Ferrocarriles, y en ese sentido no habría inconveniente en que lo retirara.

Sr. Guglielmelli. — Aclarado el punto en el sentido de refirmar las facultades del Poder Ejecutivo, y como deseo que el proyecto se sancione hoy evitando pérdida de tiempo, no tengo inconveniente en retirar mi proposición, que será la tercera retirada en esta emergencia, pero una retirada honrosa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar si se autoriza el retiro del artículo 7º.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda retirado.

—El artículo 8º, que pasa a ser 5º es de forma.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda sancionado. Se comunicará al Honorable Senado.

12

COLONIZACION NACIONAL

—El despacho está insertado en el tomo II, páginas 168 y siguientes.

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa la consideración en particular de la orden del día número 73, sobre creación del consejo nacional agrario.

Ha quedado pendiente un pedido de prórroga para continuar en el uso de la palabra, solicitado por el señor diputado Infante.

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

En la sesión de ayer, el señor diputado Pastor, en nombre de los bloques de la Concordancia manifestó el propósito de que no se concediera prórrogas para las exposiciones de los señores diputados; pero como se trata de un proyecto que ya ha comenzado a considerar la Cámara y estaba en el uso de la palabra el señor diputado Infante, en esta oportunidad vamos a votar la prórroga.

Sr. González. — Como excepción.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar si se concede la prórroga solicitada por el señor diputado por Santa Fe.

—Se vota, y resulta negativa.

Sr. Guillot. — Pido que se rectifique la votación.

—Rectificada, resulta nuevamente negativa de 51 votos. Votan 83 señores diputados.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Se necesitan dos tercios de votos para conceder la prórroga.

Sr. Pastor. — Pido la palabra.

Creo que hay una mala interpretación en este asunto.

El señor diputado Infante estaba en el uso de la palabra antes de que la Cámara tomara la resolución de no acordar prórrogas. De manera que él no podía prever que debía ajustar su discurso al término reglamentario.

Por eso creo que los señores diputados que votan en contra, lo hacen sin apercibirse de la verdadera significación de la votación. Pido, entonces, que se rectifique nuevamente la votación.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a rectificar nuevamente.

—Rectificada, resulta nuevamente negativa de 49 votos, sobre 83 señores diputados, siendo necesarios los dos tercios de votos.

Sr. Pita. — Pido votación nominal.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Como se ha solicitado votación nominal, dejamos constancia que si la mayoría, o sea la Concordancia de la Cámara, retira su indica-

ción de ayer, negando la prórroga a los discursos de los señores diputados, estamos dispuestos a votar la prórroga que solicita el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Pita. — No retiramos nada.

Sr. Ruggieri. — Si la mayoría de la Cámara no acepta la modificación de lo resuelto en la sesión de ayer, nosotros no podemos admitir la aplicación de un criterio distinto según quienes sean los diputados que hagan uso de la palabra.

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

El señor diputado no es leal con su pensamiento, porque la situación que se ha creado es una situación especial, de emergencia.

Las palabras pronunciadas por el señor diputado Pastor en nombre de la Concordancia, se referían para el futuro y no para situaciones existentes, a tal extremo que, a pesar de haberse resuelto un plan de trabajo, no se ha desplazado la cuestión ferroviaria, así como ahora se ha de tratar el plan de colonización. De manera que la decisión del bloque de la Concordancia se refería al futuro y ésta es una situación que estaba planteada hace tiempo. El señor diputado por Santa Fe hace más de tres semanas estaba en el uso de la palabra y al solicitar prórroga para continuar su exposición, la sesión se levantó por falta de número.

Quiere decir que la situación del señor diputado es especial.

Sr. Ruggieri. — Para nosotros no puede haber más que una conducta. No aceptamos para el futuro la aplicación de un criterio distinto del que se pretende aplicar ahora.

Sr. Pita. — He pedido que la votación sea nominal.

Sr. Pastor. — Deseo decir antes algunas palabras, como que he sido el autor de la indicación de ayer.

Yo no me he referido en ningún momento, al formular ayer mi moción, a situaciones anteriores a ella.

Es una cuestión de lógica y de consideración para los señores diputados.

Un diputado a quien no se le ha prevenido que no podrá usar de la palabra más de quince minutos, no ha podido encuadrar su discurso dentro de ese término de quince minutos y tenía una situación pendiente antes de la resolución de la Cámara, que no puede tener ningún efecto retroactivo.

En cuanto a las palabras del señor diputado Ruggieri, que significan una coacción para los que hemos tomado esa resolución ayer, le expreso que la vamos a mantener dentro de sus

términos y que la responsabilidad de la votación de hoy no recaerá sobre los sectores de la Concordancia, porque evidentemente en este momento son minoría en el recinto. Esa responsabilidad recaerá sobre los que son mayoría en este instante en la Cámara.

Sr. Tamborini. — Pido la palabra.

Voy a votar la prórroga solicitada, con el criterio de que en adelante votaré cualquier prórroga que un señor diputado solicite y anote este antecedente para cuando la Concordancia, en el caso improbable de que en alguna situación tenga mayoría, quiera hacer valer la circunstancia actual.

Sr. Martínez (G. N.). — Adhiero a las manifestaciones del señor diputado.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar nominalmente.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Para evitar una votación nominal y después de las palabras que ha pronunciado el señor diputado, presidente del sector de la Unión Cívica Radical, que excluyen la posibilidad de que se repitan los resultados de las votaciones realizadas por signos, anticipo a la Cámara, que nos pronunciaremos también favorablemente por la prórroga solicitada, en cuyo caso no habría necesidad de una votación nominal.

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿El señor diputado por Santa Fe, retira su indicación de votación nominal?

Sr. Pita. — Sí, señor presidente; ahora es innecesaria.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar si se prorroga el uso de la palabra al señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa con la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Infante. — Cuando interrumpí mi exposición, había manifestado que el análisis de las sentencias de la Suprema Corte, dictadas sobre la materia que nos ocupa, me llevaría a la conclusión de que el caso que se plantearía, en virtud de la sanción de la ley, sería resuelto en el sentido de su inconstitucionalidad. En razón del breve término de que voy a disponer, se me permitirá que no haga ningún resumen

de lo expuesto y que retome el hilo de la exposición en el punto en que lo había dejado.

En 18 de junio de 1867, la Suprema Corte confirmó el auto del juez de sección, que declaró sujeta a la expropiación una fracción de campo, comprendida en la zona de una legua a cada lado de la vía, que las leyes del 27 de junio de 1855 y del 12 de mayo de 1863, habían autorizado al gobierno nacional a expropiar, con el compromiso de darla en propiedad a la empresa del Ferrocarril Central Argentino.

En el primer considerando hizo constar la corte que el demandado se había conformado con la expropiación. Esta circunstancia resta fuerza a los considerandos posteriores, en los que el mismo tribunal declaraba que la construcción de la obra sólo podría cumplirse expropiando los terrenos de los particulares comprendidos en la demarcación; que el error de la calificación de utilidad pública no podía ser razón para objetar ni discutir la constitucionalidad de esas leyes ante los tribunales, pues el artículo 17 de la Constitución dejaba librado a la discreción exclusiva del Congreso el juicio sobre la utilidad pública. A continuación calificaba la construcción del Ferrocarril Central Argentino como obra de una conveniencia evidente para el progreso y aun para afianzar la paz y la tranquilidad de la República.

El fallo de la corte elevaba de 3.000 a 4.000 pesos bolivianos el precio de estimación de la legua cuadrada, y —sea dicho de paso— a lo largo de ese camino de carreta de casi 100 leguas que unía a Rosario con Córdoba, estaban los modestos establecimientos de campo de las familias criollas que representaban las avanzadas de la civilización en esa zona, familias que fueron desposeídas y que en su mayoría se perdieron como elementos de población y progreso agrario.

En el debate que tuvo lugar en el Senado en el año 1925, con motivo del proyecto de suspensión de la ley número 11.289, el señor senador por la provincia de Santa Fe, doctor Caballero, analizó los efectos de esas expropiaciones, y algún día se escribirá la triste historia de esas familias a las que se dió un pequeño capital en cambio de sus tierras heredadas y que no supieron, por falta de preparación para invertir el dinero efectivo, o no pudieron por falta de oportunidad, hacer otra cosa que comerse poco a poco su pequeña hacienda.

La Constitución se había aplicado, el progreso había cumplido su misión; pero ambos habían escrito una de las más dolorosas páginas de la historia de nuestras pampas.

En 13 de agosto de 1868, la Suprema Corte confirmó la sentencia del juez de sección por la cual se resolvía un caso análogo estableciendo también en el considerando 1º, lo mismo que había hecho en el caso anterior: que los expropiados se habían conformado con la expropiación.

Fué en 14 de abril de 1888, cuando la Suprema Corte se pronunció, revocando la sentencia del juez federal que había declarado a la Intendencia Municipal de Buenos Aires debidamente autorizada por la ley del 4 de noviembre de 1884, a expropiar toda la superficie de una finca afectada por la traza de la avenida de Mayo, y estableció que no era procedente la expropiación sino en la parte necesaria que hubiera materialmente de ocupar la avenida.

En el considerando 26, dijo el Tribunal que no podía deducirse un argumento serio contra las conclusiones de su considerando precedente, de las decisiones anteriores de la Corte a que acabo de referirme, porque en los casos de esos fallos mediaba una circunstancia que no existía en el presente y que hacía desaparecer toda paridad entre ellos, pues la concesión de aquellas tierras fué hecha, teniendo en mira y fijando como condición de ella su población y colonización, para proporcionar tráfico y vida a la vía proyectada, objeto en sí de verdadero e indiscutible interés público.

Entre otros argumentos, la Corte hacía el que se refiere a la limitación de las facultades del Congreso, de las que ya nos hemos ocupado, y el que se desprende del derecho que conservan los propietarios de los bienes expropiados a retraerlos por el precio de la indemnización recibido si no fuesen destinados al fin de utilidad pública que se invoca, pues si así no fuese, agrega, y fuera permitido y lícito a los poderes públicos, so color de utilidad común, invadir la propiedad privada más allá de lo estrictamente necesario al interés general y despojar al ciudadano de lo suyo, substituyéndose a él en el uso y goce de sus bienes, ya para someterlos a una explotación más provechosa a los intereses fiscales, ya simplemente para lucrar vendiéndolos a terceros, desaparecería a la vez que todo límite al derecho, aunque legítimo, exorbitante de la expropiación, la garantía única contra el abuso posible de tal derecho.

En el considerando 11, parece a que la Suprema Corte hubiera previsto el caso que nos preocupa particularmente. «Con tal sistema—dice— en efecto, para efectuar obras de utilidad pública en un extremo del país, por

ejemplo, sería permitido expropiar bienes en el otro y atacar arbitraria e indistintamente en todos los puntos del país el sagrado de la propiedad, pues que haciéndose basar el derecho de expropiación no en la afectación o aplicación material de los bienes privados a servicios u obras de utilidad nacional, sino en la mayor o menor conveniencia pecuniaria de ellas o en la designación discrecional y arbitraria del Poder Legislativo al respecto, no habría razón para distinguir entre las propiedades adyacentes o más o menos próximas a las obras y las situadas en los puntos más remotos de las mismas, pudiendo todas ser agredidas por igual, siempre que así se entendiese convenir a los intereses fiscales o fuese ello de la voluntad de aquel cuerpo».

Los mismos adversarios de esta sentencia reconocen que la ley de 1884, por la que se autorizaba la apertura de la avenida de Mayo, tenía el defecto de no haber determinado en medidas exactas la totalidad del área a expropiar.

Al discutirse la ley que declaraba de utilidad pública la apertura de una plaza que circundaría el palacio del Congreso y el comienzo de cuatro avenidas transversales, facultando a expropiar, además de los 60.000 metros que ocuparía la plaza y los arranques de las avenidas, 44.000 metros disponibles para la edificación, con lo cual se subsanaba el defecto de la ley de 1884, que acabo de señalar, se dijo al sostener la constitucionalidad de la expropiación de este sobrante: que esta medida no afectaba el sentido clásico de la prohibición legislativa, que consiste en no tomar a un individuo su propiedad para beneficiar con ella a otro individuo.

Esta ley fué aprobada en 1907, y más tarde, en 1912, se votaron las números 8.854 y 8.855, autorizando la apertura de las avenidas Roque Sáenz Peña y de Norte a Sur, que responden al sistema de expropiación que se ha llamado por zonas o fajas de terreno, a cada lado de la avenida.

Es que, señor presidente, estos casos son muy distintos y repito que sólo de una manera indirecta pueden ser invocados como precedente de los artículos que se proyectan. Cuando se abre una avenida, la propiedad que queda con frente a ella se valoriza por razón de la obra, y el método o sistema de extender la expropiación a una franja de esa finca es una forma de resolver la dificultad que estriba en apreciar el mayor valor que adquiere la fracción que le queda al propietario expropiado y tam-

bién de evitar las injusticias resultantes de las diversas circunstancias materiales que pueden presentarse en los distintos casos.

Se ha sostenido que la jurisprudencia de la Suprema Corte había sido cambiada por la sentencia dictada en 19 de junio de 1900, en el juicio seguido sobre inconstitucionalidad de la ley de la provincia de Santa Fe, del 1º de octubre de 1881, en virtud de la cual se facultaba al concesionario del Ferrocarril Oeste Santafecino a expropiar cien hectáreas en los puntos que a su sentir fuese necesario para la instalación de estaciones y formación de pueblos destinados a dar viabilidad a la línea.

La Suprema Corte confirmó la sentencia que había sido recurrida ante ella y declaró que la ley de la provincia de Santa Fe no era repugnante a la Constitución nacional; pero en su considerando 4º dijo que la doctrina contenida en el anterior era la aplicada en la causa que sólo declaró nula la ley sobre la avenida de Mayo, en lo relativo a las fincas no necesarias para la apertura de la misma avenida declarada de utilidad pública, con un ancho determinado, sin substituir disposición alguna a las contenidas en la ley número 1.563.

En el considerando 3º planteó el caso: «Que reconociendo así el recurrente la constitucionalidad de la ley de expropiación de tierras para el Ferrocarril Oeste Santafecino, aparece inadmisble la tacha de inconstitucionalidad en lo que encuentra excesivo en la misma ley sobre el ancho de la vía y estaciones y pide que se altere, por estar librado al criterio de las Legislaturas, la calificación de lo que la utilidad pública reclama, con el requisito de la previa indemnización (artículo 17 de la Constitución), condiciones que resultan y se reconoce que han sido guardadas en la ley provincial mandada cumplir por el tribunal *a quo*.»

Pudo, pues, decirse con razón en el año 1907, que relejendo los documentos judiciales relacionados con el asunto, se obtiene la convicción de que la única vez que la Suprema Corte se ha abocado a resolver el caso de la expropiación por utilidad pública en su fase constitucional, es cuando se trató de la ley referente a la avenida de Mayo. Los demás fueron sencillamente litigios sobre precios fallados por los tribunales inferiores, o como en el caso resuelto en el año 1900, en que se pretendió la substitución de una disposición de una ley que en su aspecto fundamental no se atacaba como inconstitucional. No hay que olvidarse que todo lo que se argumentó entonces se refería a la

propiedad urbana, con una sola excepción, de la que me voy a ocupar en seguida, y que las situaciones son muy distintas.

—Suena la campanilla que indica la expiración del término de que dispone el orador, para usar de la palabra.

Sr. Infante. — Según mi reloj, faltan aún cuatro minutos, señor presidente, dentro de los cuales espero terminar.

Sr. Allperín. — Podría concederse al señor diputado esa prórroga.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Puede continuar el señor diputado.

Sr. Infante. — La expropiación por zonas es el otro medio que se ha excogitado para hacer pagar al propietario favorecido el beneficio que debe pertenecer y que pertenece en realidad a la comunidad desde que ella lo creó. El *local assesment* o el *contributo*, impuestos que tienen especialmente en cuenta el mayor valor alcanzado por las propiedades favorecidas por la obra pública, lo mismo que aquél caben dentro de nuestra Constitución.

La excepción que antes señalé se refería a la Ashburn Act, de 1885, para Irlanda y a la Land Purchase Act que la completó y que tenían por propósito comprar las tierras a los grandes propietarios, señores feudales de Irlanda, para ser fraccionadas y revendidas a particulares. Estas leyes fueron discutidas en el Parlamento, de todo punto de vista, pero no se argumentó contra ellas su inconstitucionalidad.

La población de Irlanda, de 5.500.000 en 1811, había llegado a 8.200.000 habitantes en 1841. El año 1846 se conoce en la historia de Irlanda con el nombre del «año del hambre». Desde 1847 hasta 1851 emigraron 1.200.000 irlandeses y desde este año hasta 1905, 4.000.000. La población rural, de 7.000.000 en 1841, bajó a 3.000.000 en el año 1911. Bastan estas cifras como comentario de aquellas leyes.

La provincia de Santa Fe, en 50 años, desde 1889 a 1939, ha pasado de 200.000 habitantes a 1.500.000 habitantes.

No creo que pueda sostenerse la necesidad de la medida que se discute para lograr las finalidades que en el artículo 1º del proyecto se enuncian.

Todo propietario, en un país donde la propiedad individual es reconocida por la legisla-

ción positiva constitucional, tiene, por el mero hecho de ser propietario, cierto rol social que desempeñar. Al lado de la *potestas procurandi* que le faculta para obtener en provecho propio los beneficios legítimos que su propiedad le puede reportar, está la *potestas dispensandi* que le impone la obligación de usarla de tal modo que represente también un beneficio social.

Desde muy antiguo se ha sostenido la conveniencia de la explotación de la tierra por su propietario. La propiedad no es un derecho intangible y sagrado, sino un derecho continuamente variable, que debe modelarse sobre las necesidades sociales a las cuales responde. Pero mientras el sistema de la propiedad individual responda a la necesidad social y el propietario cumpla su función social, el legislador debe abstenerse de toda modificación fundamental en esta materia. Son muy peligrosos los remedios que empiezan por producir necesariamente un cataclismo social. Las revoluciones, aun las meramente legislativas, han dejado siempre grandes saldos de dolores y de infelicidad. Los privilegios injustos se vuelven siempre contra aquel a quien se pretende beneficiar más allá de la justicia.

Si en el momento presente de la evolución de la humanidad, la formación de naciones, mejor dicho de nacionalidades homóneas se nos aparece como una etapa indispensable para llegar a un mundo pacificado y más feliz; si cada generación ha de reemprender la lucha social para no perecer como las especies animales que en el transecurso de la evolución natural desaparecieron de la tierra, es indispensable que se favorezca por medio de las leyes todo lo que tienda a la consolidación de una patria integrada por ciudadanos homogéneos que sientan firmemente la solidaridad y que se evite toda ley que separe, que disuelva, que ponga a los ciudadanos los unos frente a los otros y que conspire contra las ideas, sentimientos y tradiciones que inspiraron los principios de organización social que nos legaron los autores de nuestra Constitución nacional.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Aun cuando la Cámara no ha entrado todavía a considerar el artículo referente a las expropiaciones, dado que el despacho ha sido argüido de inconstitucional en sus bases fundamentales por el señor diputado por Córdoba, doctor Pizarro, y por el señor diputado por Santa Fe, doctor Infante, voy a apresurarme a contestar las observaciones que formularon, tratando de demostrar su inconsistencia.

El señor diputado por Córdoba ha aducido la inconstitucionalidad de esta ley, fundándose en que por ella el Congreso ordena la colonización en todo el territorio de la Nación, penetrando en los territorios provinciales, a pesar de existir la disposición del artículo 67, inciso 16, en virtud de la cual corresponde legislar sobre colonización solamente a los Estados provinciales.

Se argüía también la inconstitucionalidad, porque se sostenía que el Congreso al conceder al consejo autárquico la facultad de realizar expropiaciones, delegaba facultades y atribuciones que le son propias y se insistía en la inconstitucionalidad, porque por medio de una ley general se le acordaba esa facultad, siendo que en cada caso la expropiación y, en consecuencia, la declaración de utilidad pública, debe hacerla sólo y exclusivamente el Congreso.

Por último, se argüía por el señor diputado por Santa Fe, que esta ley es inconstitucional, porque no puede efectuarse la expropiación de un bien de una persona, para subdividirlo y atribuir el dominio a otras.

El despacho establece la colonización en todo el país, de acuerdo con las facultades que se le acuerda al consejo agrario. Esta acción colonizadora no va a penetrar en los Estados federales abrogando sus leyes y desconociendo sus derechos, sino que ha de realizarse en las provincias que dicten leyes, que hagan posible la misma colonización por medio del instituto autárquico.

Por otra parte, este instituto, al colonizar en las provincias, lo hará como una entidad de derecho privado, como cualquier individuo que quiera colonizar de acuerdo con las leyes de los Estados provinciales.

La objeción hecha por el señor diputado por Córdoba, es repetición de la del legislador Oroño, cuando se trató la ley de 1876. Sus argumentos fueron contestados victoriosamente por un jurisconsulto eminente de Córdoba: el doctor Jerónimo Cortez. El legislador Oroño se oponía a dicha ley porque quería salvaguardar las autonomías provinciales en momentos en que aun no estaba consolidada la unidad nacional. Se opuso casi diría por razones de orden político. En el momento actual ese motivo felizmente no existe: la unidad de la Nación es más indestructible que nunca y, desde ningún punto de vista, cuando el consejo vaya a realizar la colonización en los Estados provinciales, avasallará su autonomía, ni menoscabará las leyes y derechos provinciales.

Al sostenerse que sólo y exclusivamente el Congreso puede ser quien ordene las expropiaciones, se desconoce la evolución que ha experimentado en el derecho público, dentro del cual me referí en mi informe en general cuando cité a Duguít, quien alude a la evolución experimentada en el derecho público, dentro del cual se crean estos entes autárquicos, que son titulares de algunas prerrogativas de la soberanía, para ejercerlos por órganos o por agentes propios y que se encuentran sometidos más o menos a una autoridad superior. Estos entes autárquicos están incorporados a nuestro derecho; hay una cantidad de instituciones en nuestro país que se manejan como entes autárquicos: Dirección de Vialidad, Dirección de Elevadores de Granos, las juntas reguladoras. Todas ellas son titulares de la soberanía por delegación del Estado general. El Congreso al acordarles facultades, no realiza una violación de derechos y de facultades que le son propias.

Por otra parte, la generalidad de la facultad de expropiar, entregada al consejo agrario, ha sido consagrada por la Suprema Corte en numerosos fallos, algunos de los cuales me entregó hace un momento mi distinguido colega el señor diputado Anastasi, estableciéndose en ellos que no es necesario que en cada caso se pronuncie sobre el carácter de utilidad pública.

Dice uno de esos fallos: «El requisito constitucional de que la utilidad pública para la expropiación debe ser calificada por ley, no obliga al Congreso a dictar una ley especial para cada una de las propiedades expropiadas para la obra de utilidad pública, bastando la autorización general para expropiar que haga la ley, calificando la obra de cuya construcción se trata.»

Tengo en mi mesa cinco o seis fallos que fijan exactamente la misma teoría.

Por otra parte, se ha argüido que no existe utilidad pública en una ley colonizadora para dar al instituto autárquico la facultad de realizar las expropiaciones. ¿Cómo no va a existir utilidad pública para llevar adelante una ley de colonización?

En mi informe en general citaba la opinión del ministro de Australia, Kingston, que decía: «Si hay utilidad pública en expropiar una tierra para hacer un edificio público o para construir un camino, con mucha más razón existe cuando se trata de aumentar la felicidad y el número de habitantes de un país.»

Por lo demás, la facultad del Congreso para establecer la utilidad pública es omnimoda; basta que el Congreso juzgue que existe utili-

dad pública, para que, aunque no exista en el hecho esa utilidad, deba considerarse que ella es una realidad. Joaquín V. González, dice terminantemente a este respecto: «No conozco ningún principio jurídico ni leyes de la Nación, de las cuales se deduzca que la Constitución ni las leyes del Congreso, hayan establecido una limitación a la facultad de expropiar o al ejercicio de esa facultad. En cambio, conozco las disposiciones y opiniones de los autores que interpretan esta cuestión y reconocen lo que jurídicamente se llama el poder discrecional.»

Siendo cierta la existencia de la utilidad pública declarada por el Congreso, las facultades de éste no tienen limitación.

De tal manera, que si por esta ley el Congreso resuelve que existe utilidad pública en expropiar las tierras que sean necesarias para realizar la colonización que el despacho ordena, esa facultad del Congreso, no tiene ninguna limitación.

Los argumentos que hacía en la sesión de hoy el señor diputado por Santa Fe, no hacen al asunto en discusión. La jurisprudencia que él ha citado se refiere a la utilidad pública declarada por el Congreso y hecha efectiva en límites mayores que el determinado por la ley. En el caso de la expropiación para las obras de la avenida de Mayo, se extendió a los terrenos adyacentes no comprendidos en la ley. En este caso no va a pasar lo que manifestaba el señor diputado. La utilidad pública declarada en general por el Congreso para todos los terrenos que sean necesarios a fin de cumplir con los propósitos de esta ley, hará posibles las expropiaciones que podrán perfectamente efectuarse.

Por último, he de volver sobre un concepto que ya ha expresado aquí el señor diputado Repetto: Esta ley de colonización no hace más que repetir lo que dicen las leyes análogas de las provincias. La de Buenos Aires, en su artículo 3º, autoriza al consejo autárquico a verificar con carácter general, estas expropiaciones. Nuestro despacho, respetuoso del principio a que aludía el señor diputado por Santa Fe, ordena las expropiaciones solamente en los casos extremos. Establece que la colonización ha de realizarse con las tierras fiscales, con las de los bancos o instituciones oficiales, con las que adquiera mediante convenios entre estos bancos y esas instituciones, con la que adquiera en remate público. Y solamente cuando se hayan agotado todos esos procedimientos de licitación y no pueda conseguir la tierra necesaria para cumplir los fines de la ley, recién penetra en

la propiedad privada, abonando las indemnizaciones que la Constitución establece como un homenaje a los derechos y a los intereses privados.

Bastan estas pocas palabras para dejar contestadas sintéticamente las objeciones de inconstitucionalidad que se han formulado a esta ley y pido a la Cámara que proceda a votar el artículo 1º, que es el que está en discusión en este momento.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Susan. — Sería conveniente que se comunicase al señor ministro de Agricultura, que la Cámara está tratando este despacho, por si desea concurrir.

Sr. Presidente (Kaiser). — Ya se le ha hecho saber, señor diputado.

Se va a votar el artículo 1º.

Sr. Repetto. — Señor presidente: ¿está en discusión y se va a votar el artículo 1º del despacho?

Sr. Presidente (Kaiser). — Sí, señor diputado.

Sr. Repetto. — No me explico, señor presidente, cómo se ha podido disertar tan largamente a propósito de este artículo, sobre la materia de expropiación, que no tiene nada que hacer con este artículo a no ser que los autores de esas largas disquisiciones abriguen desde ya el propósito de invalidar esta ley, adelantando objeciones fundamentales de carácter constitucional.

En este primer artículo, no hay nada que se refiera a la expropiación; hay sólo un concepto fundamental que figura en el segundo párrafo y que todo diputado joven —no ya los que hemos cumplido 60 años— debería aplaudir a dos manos.

Me asombro cuando compruebo que dos ciudadanos argentinos, nacidos en épocas diferentes, lleguen a través de su vida y su experiencia a conclusiones tan opuestas como aquellas a que ha llegado el señor diputado por Santa Fe y a las que he arribado yo.

El señor diputado por Santa Fe, ya en su primer discurso y empeñado en invalidar de entrada esta ley, adelantando objeciones fundamentales que no tienen base, cantó una loa a este país y habló de la gente que come bien. Descubrió que en este país la gente come bien, probablemente el señor diputado se refería a los hombres que diariamente almuerzan en el bar «Cifré» de Rosario, pero lo que indican las estadísticas, el material demográfico que publica periódicamente el Departamento de Higiene, todo lo que sabemos en materia de de-

moografía en el país, invalida totalmente la afirmación del señor diputado. Y si ella tiene algún valor, está circunscripto al círculo reducido de los privilegiados a que acabo de hacer alusión. Lea el señor diputado, si es que tiene interés en conocer cuál es el estado real del país, las estadísticas del Departamento de Higiene y las del Departamento del Trabajo, y se informará de que toda su afirmación carece en absoluto de fundamento.

Sr. Infante. — He hecho más que eso, señor diputado.

Sr. Repetto. — ¿No ha hecho más que eso?

Sr. Infante. — He cruzado la provincia a caballo muchas veces, lo que no ha hecho el señor diputado. La conozco de palmo a palmo. Es mi provincia y no le puedo tolerar que diga eso.

Sr. Repetto. — Permítame, el señor diputado. Sobre la misma provincia hay muchas cosas que señalar. Le voy a aconsejar al señor diputado...

Sr. Infante. — ¡No necesito consejos de nadie!

Sr. Repetto. — ¡No me interrumpa el señor diputado!

Sr. Infante. — No puedo tolerar que se me dirija en ese tono. Pido a la Presidencia que no le permita al señor diputado que se exprese en ese tono.

Sr. Repetto. — No le he interrumpido en la lectura de su discurso, cuidadosamente preparado, escrito y leído.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia ruega al señor diputado que no personalice.

Sr. Repetto. — No se trata de eso.

Sr. Presidente (Kaiser). — Es que se está dirigiendo exclusivamente al señor diputado.

Sr. Repetto. — Se trata de levantar aquí, en la Cámara, una afirmación que no tiene más base que el concepto del mundo de los satisfechos que se mueven alrededor de la Bolsa de Rosario.

El informe del Consejo de Higiene de la provincia de Santa Fe correspondiente al año 1938, contiene muchos datos, muy interesantes para todo aquel que quiera aceptar con criterio completamente objetivo y sereno, informes acerca de las condiciones reales de aquella provincia.

La provincia de Santa Fe ha sido pintada por el señor diputado como un paraíso. Evidentemente todos conocemos la obra de colonización que se ha hecho en esa provincia. Todos hemos cantado un himno a aquellas lindas chaclas de Santa Fe, pobladas por hombres venidos de los países más civilizados de la tie-

rra; chacras que ofrecen hoy un espectáculo de bienestar, de solidez y de progreso técnico que realmente satisface las mejores exigencias del sentimiento nacional. Pero también en la provincia de Santa Fe hay la lacra del chacarero arrendatario y en esa provincia fué donde se manifestaron, en 1912, los primeros movimientos de protesta de los arrendatarios contra la condición realmente insoportable en que los tenían sujetos los propietarios de la tierra. Y ese proceso, señores diputados, no ha terminado con el informe de aquella comisión; comisión que prestó un real y efectivo servicio al país, porque denunció con toda valentía cuáles eran las condiciones de vida de los arrendatarios de Santa Fe y dió lugar a que se estudiaran las nuevas formas que habrían de adoptarse por una ley de protección a los mismos.

Pero las huelgas de Santa Fe no terminaron en el año 1912. En esta Cámara me ocupé en 1922 y 1923 de la huelga agraria de la provincia de Santa Fe, y tuve entonces oportunidad de documentar cómo las condiciones aquéllas del año 1912 y 1913 todavía subsistían con una intensidad igual o superior.

Durante toda mi existencia no he hecho sino conformar mi manera de considerar.

Sr. Pandolfo. — ¿Me permite, el señor diputado?

Sr. Repetto. — Sí, señor.

Sr. Pandolfo. — ¿La situación de los arrendatarios de la provincia de Santa Fe no es igual a la de los arrendatarios de toda la República?

Sr. Repetto. — No digo que sea peor.

Sr. Pandolfo. — Pero está localizando el problema en Santa Fe.

Sr. Repetto. — No digo que sea peor. Quiero decir que ese problema agrario, esa grave situación que plantea al país la condición actual de los arrendatarios agrícolas, existe en Santa Fe como en el resto del país.

Sr. Pandolfo. — Estamos de acuerdo, señor diputado; pero, si me permite...

Sr. Repetto. — De manera que en Santa Fe no todos comen bien.

Sr. Muniagurria. — Pero la mayor parte come bien, señor diputado.

Sr. Pandolfo. — Le voy a decir.

Sr. Repetto. — Es demasiado larga la interrupción del señor diputado y la voy a borrar del Diario de Sesiones.

Lo que he querido decir es esto: en la provincia de Santa Fe no todos comen bien, si se puede expresar el estado económico y social de una población usando semejantes expresiones.

Cuando el señor diputado me interrumpió...

Sr. Pandolfo. — Lo hice con el consentimiento del señor diputado.

Sr. Repetto. — No me interrumpa más, señor diputado.

Iba a llegar a una conclusión que me parece interesante. He ido aprendiendo que el derecho de propiedad se debilita poco a poco en su primitiva concepción, para ajustarse y adaptarse cada vez más a las condiciones nuevas de la vida económica y social. Eso es lo que he leído en autores de derecho cuyas opiniones se suelen citar aquí como concluyentes, contra las cuales no hay nada que esgrimir ni ningún argumento que oponer. Lo he leído en autores de derecho, en hombres que se han formado una reputación universal, cuya autoridad es aceptada por todo el mundo. Bajo la influencia de esas enseñanzas, queriendo concretarlas en alguna forma realmente práctica, susceptible de ser explicada al pueblo —al cual nos dirigimos generalmente nosotros porque es nuestro campo de acción— he llegado a la conclusión de que al derecho de propiedad se le puede reconocer —se le puede tolerar, diría yo, y se le debe tolerar— en cuanto él sea ejercitado sin oposición al interés social. Fíjense, señores diputados, que no voy muy lejos; no digo que deba ser ejercitado «de acuerdo» con el interés social, sino «sin oposición» al interés social. Y eso es lo que dicen ustedes, señores abogados, cuando conversan con nosotros en antecámaras y quieren mostrar no sólo su ilustración, sino también la evolución progresiva de sus ideas. Pero aquí, en las bancas, se argumenta con la jurisprudencia, analizando los distintos puntos de vista que han adoptado jueces o camaristas frente a determinadas situaciones particulares; pero la verdad es que el concepto de la propiedad ha recorrido en el mundo un camino muy grande. La evolución en el sentido que he indicado ha sido tan considerable, que yo mismo, que no soy partidario de poner en las leyes declaraciones teóricas y de mero principio, encuentro que la segunda parte del artículo 1º del proyecto que discutimos tiene, sino un valor práctico, por lo menos un valor teórico trascendental. Este principio indica que el interés colectivo es el que debe predominar en la materia que discutimos, y asentado el principio tendremos que aceptar luego, en todo el trayecto de la ley, las demás consecuencias.

Decía el señor diputado que hay que homogeneizar. Hay que homogeneizar ¿cómo?, ¿sobre la base de la propiedad territorial, considerada como un privilegio para algunos, y sobre la base de la enorme multitud desposeída de todo

bien material? ¿Es ésa la manera de homogeneizar? Evidentemente, ese concepto no puede proclamarse en un país ganadero rural como el nuestro, donde el pensamiento de todos los buenos ciudadanos y la política de todos los gobiernos inteligentes, deberían tender a cimentar en el seno de esta sociedad una numerosa clase de propietarios sólidamente establecidos con sus familias, con su bien y con su técnica, y que constituyan el fundamento y la fuerza de toda verdadera democracia. Así debemos hacer la homogeneización y no perfeccionando y ampliando el derecho de propiedad para aquellos que ya lo tienen y negándolo en absoluto para aquellos que no habrían de alcanzarlo nunca sin estas medidas que faciliten su acceso a la propiedad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Yo no pensaba hablar, señor presidente; pero hay manifestaciones que chocan de tal modo y con tanta fuerza con las ideas corrientes en esta materia, especialmente cuando esas manifestaciones proceden del lado joven, que uno se siente a veces indignado e invadido de melancolía y de tristeza, porque ya no sabe en quién confiar la tarea del porvenir. Yo comprendo que hay estructuras, hay mentalidades, hay individualidades, cortadas con tal fuerza dentro de moldes y criterios pretéritos, que no se avienen a la aceptación de las nuevas ideas; y muchas veces...

Sr. Solá. — No son nuevas esas ideas.

Sr. Repetto. — No son mías, señor diputado; ya he dicho que no son mías. Las he leído y las he bebido en autores que son ya demasiado conocidos.

Sr. Solá. — Son nociones...

Sr. Repetto. — Y las he escuchado —también lo he dicho— en conversaciones que ustedes en privado emiten para darse así un poco la apariencia de hombres que están dentro de la corriente moderna de este pensamiento.

Ustedes han sido mis maestros, en cierta manera, y tienen ahora que sufrir la explosión justificada y fundada de estas expresiones.

Sr. Presidente (Kaiser). — Ha terminado el incidente.

Sr. Repetto. — Voy a terminar.

Comprendo que hay, diría, psicologías profesionales, hombres que por su oficio defienden siempre estos derechos, porque es evidente que los propietarios, los ricos propietarios tienen siempre a su servicio gente que, con toda convicción, desde luego, coincide en la defensa de sus derechos. Hay hombres que dentro de esta disciplina, acaban por hacerse ellos mismos, profundamente convencidos de las ideas

cuya aplicación sirve a los intereses de otros; pero eso no quiere decir que estas cuestiones, examinadas a la luz del interés público, por hombres que no tienen otra preocupación que el bien general, que el interés del país; por hombres que quieren que la Argentina sea realmente un país de población fuerte, arraigada, numerosa, técnicamente adelantada, encuentren que estas ideas que acabo de exponer no sean conceptos elementales y tan notorios que no debiera tenerse nunca la necesidad de repetirlos en este recinto.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Infante. — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas, para contestar una pequeña alusión, que esta vez no ha sido directa; cosa que debo empezar por agradecerle al señor diputado.

Quiero manifestar, sencillamente, que en mi bufete de abogado, he defendido a muchísimos más colonos que a propietarios de tierra.

Nada más.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

El artículo 1º que está a consideración de la Cámara, trata del problema de racionalizar las explotaciones rurales y subdividir la propiedad.

A raíz de este artículo se han suscitado ideas y teorías sobre el concepto de la propiedad, sobre concepciones antiguas y modernas relacionadas con la misma.

Cuando hablé en general, sostuve que todas estas teorías de la evolución de la propiedad agraria, como se articula en el despacho, ha sido una concepción de la posguerra europea, agudizada a raíz de acontecimientos políticos que todos conocemos y que hoy día vemos refluir en la forma que están indicando los sucesos mundiales que presenciamos.

Los autores de economía señalan que la primera y más importante característica de la política rural después de la guerra, es probablemente el profundo cambio que ha sufrido en muchos países el régimen de la propiedad agraria; pero este régimen no se ha establecido con un solo criterio de subdivisión de la tierra sino que en otros se ha hecho con el criterio de remembramiento de la propiedad en aquellos en que las parcelas fuesen suficientemente pequeñas o fuesen insuficientes para el cultivo y la finalidad industrial a que estaban aplicadas. Estos problemas agrarios producidos principalmente en los países afectados por la guerra europea son los que han traído la honda perturbación que en estos instantes está sufriendo toda la Europa. Y lo voy a probar.

En Austria, por ejemplo, se trató, sobre todo,

de volver económicamente viables ciertas explotaciones agrícolas de extensión extremadamente limitada y con este fin se reconstituyeron alrededor de 500 propiedades y se agrandaron cerca de 2.200 propiedades.

En Hungría, esta especie de repartición fué aplicada a 655.000 hectáreas. En Bulgaria se ha hecho lo contrario para luchar contra el peligro de un gran parcelamiento y se procuró reintegrarla. El número de explotaciones de 993.000 en 1908, pasó a ser 734.000 en 1926.

Y entramos en la zona que podríamos llamar de fuego, en Europa; entramos a los países donde la reforma agraria...

Sr. Repetto. — Si me permite el señor diputado...

En Alemania, antes de la guerra se modificó la forma y las dimensiones de las propiedades rurales, por ley; y después, con el acuerdo de los propietarios, se dió a la propiedad rural una forma mucho más conveniente. Y a esa ley se prestaron gustosamente los propietarios.

Sr. Pizarro. — El proceso de la propiedad rural cumplido en Alemania, lo conozco como el señor diputado.

Sr. Repetto. — Recordaba solamente el hecho.

Sr. Pizarro. — Conozco la legislación de fondo y la he recordado con exactitud en los artículos 903 y 905, que determinan el concepto y alcance de la propiedad civil en Alemania. Las ventajas a los fines de que la propiedad no fuera excesivamente subdividida por las leyes hereditarias, también las conozco.

Vamos a entrar a lo que yo llamo la zona de fuego de la Alemania oriental.

En Checoslovaquia, por ejemplo, en ley de 1921, citada aquí y a la que yo he hecho referencia, tuvo como consecuencia que la operación de expropiación de la tierra se realizara sobre 4.000.000 de hectáreas, más o menos, de las cuales 2.600.000 fueron adjudicadas, quedando 1.450.000 más o menos en poder del Estado, para adjudicarse.

En Lituania, sobre una superficie de 5.500.000 hectáreas se han expropiado 450.000 y se destinó a la subdivisión y asignación de tierras expropiadas cerca de 35.000 nuevos propietarios.

En Letonia, con cerca de 950.000 hectáreas, las propiedades no pasan de 50 hectáreas.

En Estonia se han expropiado 2.400.000 hectáreas más o menos para ser subdivididas.

En Rumania, sobre 20.000.000 de hectáreas de tierra cultivable se han expropiado alrededor de 6.000.000 que sirvieron para aumentar sensiblemente la pequeña propiedad y para mantener el régimen rural dominante.

En Yugoslavia se han expropiado 660.000 hectáreas, más o menos, de las cuales se ha confiado la colonización a 200.000 personas, vale decir, a razón de 3 hectáreas por persona.

En Polonia se han fragmentado 1.800.000 hectáreas más o menos, con las cuales se han constituido 235.000 explotaciones agrícolas, lo que quiere decir, que la proporción es de 5 hectáreas por persona.

En Grecia se ha procedido a la enajenación forzada de 1.500 propiedades, donde se ha colocado a 45.000 familias. Las superficies son sumamente limitadas.

Si se consideran en conjunto —como dice el profesor Cioli, que dicta esta materia en la Universidad de Roma—, y Acerbo en su obra, las modificaciones sufridas por el régimen de la propiedad rural en cada uno de esos países, se observa que la reforma agraria fué generalmente realizada bajo la forma jurídica de la expropiación.

Pero, en realidad, la expropiación no se cumplió porque la moneda depreciada y la diferencia de los valores mobiliarios con respecto al valor de la tierra, hacía que la indemnización no fuese equitativa.

Lo más importante —y aquí radica el nudo social de la cuestión— son las siguientes palabras: «La reforma agraria ha sido decidida en estos países mucho más por razones políticas que por razones económicas. Ella tenía esencialmente por fin dar la preponderancia a los nuevos partidos cuyos programas respondían mejor a las exigencias nacionales. Es así que en Estonia, Letonia y Lituania la reforma agraria tuvo por objeto substraer las tierras a los propietarios alemanes, a los cuales ellas pertenecían, para entregarlas y distribuirlas a los elementos nacionales, mucho más numerosos.»

Con esta legislación de la posguerra, fundada en la situación circunstancial del medio europeo, se quiere introducir en nuestro país un sistema de colonización o de subdivisión de la propiedad rural, que no conduce a nada práctico. Y ya estamos viendo en Europa a qué consecuencias sangrientas llevan los procedimientos cuando se contemplan con carácter político, y no con carácter económico, las necesidades de los pueblos.

Sr. Palacio. — ¿Me permite el señor diputado?

En mi informe en general me referí a la colonización realizada en los países que acaba de citar el señor diputado. Dije que la colonización había tenido por objeto principal dar tierras a los soldados desmovilizados después de la guerra, y agregué también que en este des-

pacho se prescindía en absoluto de tal concepto, que no era aplicable en nuestro país.

Esa colonización a que aludía el señor diputado, se realizó mediante expropiaciones sin pagar indemnización: el Estado se apropiaba violentamente de la tierra. En cambio, nosotros pretendemos realizar una colonización con expropiaciones que respeten la propiedad privada dentro de nuestra Constitución y la legislación civil, pagando indemnizaciones con el concepto económico y social que ampliamente expresé.

Sr. Pizarro. — Acepto el propósito y la declaración del señor presidente de la Comisión de Legislación Agraria, en cuanto a la finalidad que persigue.

No es exacto que no se haya expropiado: se ha expropiado y también se han incautado. La expropiación nunca ha surtido los efectos de tal, por las razones que he expuesto. En Rumania, por ejemplo, se expropiaron 6.000.000 de hectáreas, pero pagándose con moneda y valores mobiliarios depreciados, basta leer el Boletín de la Sociedad de Legislación comparada 1924/25 y los autores citados.

Lo que me interesaba era dejar constancia de que no debemos legislar con otro criterio que no sea el exclusivamente agrario. No podemos decir que vamos a colonizar en nuestro país con el mismo sistema y criterio de Europa; que porque en Europa se subdivide también debemos subdividir nosotros.

Tampoco podemos hablar, como en el despacho, de pequeñas propiedades, porque lo pequeño es relativo con relación al territorio, a la actividad agrícola o agropecuaria que se realice.

Sr. Repetto. — La extensión de la propiedad se ajusta a las necesidades de trabajo de cada familia, en un orden determinado de explotación.

Sr. Pizarro. — Depende del cultivo, de la zona, de la actividad industrial, etcétera.

Sr. Guillot. — El artículo 21 la define. Por eso nos parecía redundante el adjetivo «pequeña», refiriéndose a la propiedad, introducido en los otros artículos.

Sr. Pizarro. — Yo no estoy en contra de la subdivisión de la propiedad, sino de que perturbemos las libertades, los derechos y las garantías constitucionales con normas restrictivas.

Se ha dicho que la utilidad pública la fijamos discrecionalmente. Es cierto que la Constitución ha puesto en poder del Congreso la facultad de declarar la utilidad pública, pero no en una forma discrecional y arbitraria.

Alberdi, tratando esta materia en el sistema económico y rentístico de la Constitución, decía: «Pero no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada en su principio, y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso, en el uso y disponibilidad de sus ventajas. Los tiranos más de una vez han empleado esta distinción sofística para embargar la propiedad, que no se atrevían a desconocer. El socialismo hipócrita y tímido que no ha osado desconocer el derecho de propiedad, ha empleado el mismo sofisma, atacando el uso y disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización del trabajo. Teniendo esto en mira y que la propiedad sin el uso limitado es un derecho nominal, la Constitución argentina ha consagrado por su artículo 14 el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad, con lo cual ha echado un cerrojo de fierro al avance del socialismo.

«La Constitución no se ha contentado con entablar el principio de propiedad, sino que también ha dado los remedios para curar y prevenir los males en que suele perecer la propiedad. *El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca.* Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública. Para cortar este achaque, la Constitución ha exigido que el Congreso, es decir, la más alta representación del país, califique por ley la necesidad de la expropiación, o mejor dicho, de la enajenación forzosa, pues, en cierto modo, no hay expropiación desde que la propiedad debe ser previamente indemnizada.

«Puede ser atacada la propiedad por contribuciones arbitrarias o existentes del gobierno. Para evitar este mal ordinario en países nacientes, la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso el poder de establecer contribuciones.» (Página 384, edición oficial de Bezançon, 1856.)

Ruego se dé lectura por Secretaría, de dos párrafos más.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — (*Leyendo*): «La propiedad puede ser atacada por toda ley industrial que coarte o restrinja el derecho de usar y de disponer de ella, asegurado por el artículo 14 de la Constitución. *Este derecho de usar y disponer de su propiedad, como acaba de verse, no es diferente, separado del dominio que por el derecho romano y español se ha definido siempre: el derecho en una cosa de la cual nace la facultad de disponer de ella* (ley número 33, título 5º, partida 5ª). *Algunos socialistas de esta época, menos audaces que los que negaron el derecho de propiedad, han sostenido que el Estado tenía legítimo poder para*

limitar el uso y disponibilidad de la propiedad, ya que no el de desconocer el derecho de su existencia. Sea cual fuere el valor de esta doctrina ella es inconciliable con el artículo 14 de la Constitución argentina y con la noción del derecho de propiedad que debemos al código civil romanespañol.» Pág. 411, ob. cit.

Sr. Pizarro. — El propio doctor Vélez al legislar en materia del Código Civil, refiriéndose, si mal no recuerdo su nota, a los artículos 2.513 ó 2.515, decía expresamente haciendo la cita de un economista, que aquél que se constituye en juez del abuso, bien pronto se constituye en juez del uso y anula substancialmente la existencia del derecho que se controla.

Por eso nosotros, al legislar en esta materia, debemos ser parcos al tratarse de esa garantía establecida por la Constitución, como mañana si necesitáramos defender las garantías personales de libertad o de cualquier otra naturaleza consignadas en nuestra Carta Fundamental.

En ese sentido y con estas limitaciones, expreso mi voto por el artículo 1º.

Sr. Susan. — Pido la palabra.

No me voy a referir a la faz constitucional de la expropiación, pues me parece que las palabras del señor miembro informante dan sólida base a la constitucionalidad de la expropiación que pueda realizarse en beneficio del colono.

La discusión producida hace un momento y sobre todo, las palabras del señor diputado Repetto, me obligan a expresar algunos conceptos que justifican y afirman la necesidad de esta ley de colonización y la de que el trabajador del campo se arraigue en la tierra que labora. Dijo el señor diputado Repetto que había hombres que comen bien y hombres que comen mal y se refería, al parecer, a los colonos de Santa Fe.

Sr. Repetto. — Si me permite el señor diputado...

Sr. Susan. — Voy a expresar mi concepto...

Sr. Repetto. — Es que no podría hacerlo en base a un interpretación errónea. Yo no he dicho que hay argentinos que comen bien o que comen mal. Esa expresión ha sido lanzada aquí en este recinto. Yo la he recogido hoy.

Sr. Susan. — Yo creo también que hay colonos que comen mal.

Sr. Repetto. — Yo no lo he dicho, pero lo ratifico.

Sr. Susan. — Quise reaccionar al escuchar esas expresiones, pero pensando un poco más comprendí que ellas tenían algo de razón y de exactitud, en cuanto hay que distinguir

dos clases de colonos: el colono propietario y el colono arrendatario. El primero es el hombre que en época de bonanza ha conseguido reunir un capital suficiente para hacerse dueño del campo que hoy labora y en el que ha edificado y hecho mejoras de otra naturaleza, que le permiten vivir con tranquilidad. En cambio, el colono arrendatario, que paga arrendamientos excesivamente altos, que no guardan relación con el interés que representa el valor de las tierras, que a veces paga arrendamientos en especie que llegan hasta el 45 % por cuadra, puestos los frutos en la estación, esos colonos, digo, viven en permanente inquietud, no saben si las cosechas, sea por la lluvia, por seca, por la langosta o por la tucura, etcétera, les rendirán suficientes beneficios para pagar el arrendamiento. Creo que esa gente no vive en las mismas condiciones que el colono propietario, y son ellos los que están clamando por una ley de colonización.

Sobre este particular quiero aclarar un concepto que en cierto momento perteneció al señor diputado Repetto, quien decía que son menos los colonos que piden la ley de colonización, que otros que no son trabajadores de la tierra. Soy médico rural. vivo en contacto permanente con los trabajadores del campo, con los chacareros, y ellos, que conocen ya estas inquietudes, sea por los diarios o por la radio, viven constantemente preguntando cuál será el destino de la ley, porque creen que ella podrá beneficiarlos en algún momento.

Sr. Mugica. — Pido la palabra.

No quiero votar en silencio este artículo. Empiezo por declarar que voy a votar afirmativamente la segunda parte del artículo 1º, que ha sido objeto de observación.

La Constitución nacional, en su artículo 14, dice que todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: usar y disponer de su propiedad... Y en el artículo 17 se establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.

Soy de los que creen que la amplitud de los conceptos constitucionales permite una evolución en la interpretación de los mismos. No creo que estemos atados a los conceptos expresados por juriconsultos argentinos de la más alta autoridad en el siglo pasado y comienzos del presente. Creo que el mundo ha evolucionado y que hoy ningún habitante de la

Nación debe ejercer el derecho de propiedad en contra del interés general. He sostenido estas ideas cuando he tenido el honor de desempeñar cargos públicos, y he defendido alguna vez, dentro de la esfera de acción en que me ha tocado actuar, el interés público frente al avance de los propietarios que querían abusar de su derecho absoluto en detrimento del interés general.

Yo creo que el concepto absoluto de propiedad que hemos heredado, no sólo de los viejos derechos romano y español, sino, también, de las ideas netamente individualistas de la Revolución Francesa está en franca decadencia. No en balde el mundo ha recorrido un ciclo político y económico que está a la vista de todos.

Creo, entonces, que no vamos contra las prescripciones de la Constitución nacional al reglamentar, como lo establece ella misma, el uso y no el abuso del derecho de propiedad, y yo entiendo como diputado argentino que usar del derecho de propiedad en contra del interés público es abusar de aquél.

Nada más. (*¡Muy bien!*).

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Como este artículo 1º contiene un principio alrededor del cual ha girado un activo movimiento de ideas y de opiniones contrapuestas, me parece oportuno fundar mi voto, siquiera sea para fijar una posición personal.

Voy a votar afirmativamente el artículo, especialmente en lo que se refiere a su segundo apartado, porque considero que con ello desarrollamos el contenido de propósitos constitucionales.

Alguna vez he podido escribir que es admisible que la Constitución sea un repertorio de normas, pero que podemos afirmar también que es una armonización de principios, una composición de ideales a cumplir. Con esto, señor presidente, y al votar leyes de esta naturaleza, que van a poner en función principios que no son inéditos ni novedosos pero que constituyen un agente de transformación del derecho positivo actual, un diputado radical como el que habla no abandona el servicio de la Constitución, que alguna vez fué declarada programa de partido. Entiendo con ello que lejos de abandonar el programa de la Constitución, principios de este alcance importan ejecutarla en su esencia imperecedera más que en su materialidad mortal. Pues el culto constitucional no puede ser la repetición monótona de una serie de actos y gestos constantemente iguales a sí mismos; no es un rito, sino una misión a ejecutar en el seno de la sociedad civil argentina.

Voy a hacer la única cita que me permitiré en esta brevísima exposición, recordando al Chief Justice Marshall cuando decía: «No olvidemos que es una Constitución lo que interpretamos, una Constitución destinada a durar por los siglos venideros y, por consiguiente, a ser adaptada a las variadas mutaciones de los asuntos humanos. Debemos comprender —agregaba— y hacer comprender a los demás, que ellos —los Constituyentes del 53 en nuestro caso— han creado un ser cuyo desarrollo no podía haber sido previsto enteramente por los autores mejor dotados».

De acuerdo con ese concepto, creo que el precepto que pone en actividad esta ley, a la cual alguna vez he calificado de acuerdo con mi pensamiento liberal —y no claudico de él al votar este artículo—, desarrolla un principio contenido en la Constitución, que si no pudo ser previsto por los Constituyentes puede ser adaptado a las variantes mutaciones de la sociedad en que vivimos.

Nada más. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 1º.

Sr. Pandolfo. — Pido que la votación sea nominal, para que conste cuál es el temperamento de los hombres que votan esta ley.

Sr. Ravignani. — El temperamento no, las convicciones.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia desca saber si está suficientemente apoyada la indicación de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Prosecretario (Madero). — Han votado 98 señores diputados por la afirmativa y seis por la negativa, en la siguiente forma:

—Por la afirmativa, los señores diputados: Acuña, Aguirre Cámara, Agulla, Allperín, Anastasi, Araujo, Arias Uriburu, Astesiano, Barceló, Barrau, Barrionuevo, Busaniche, Busignani, Cabral, Cafferata, Cantilo, Cappellini, de las Carreras, Castex, Cisneros, Cooke, Cordero, Díaz, Dickmann, Eyto, Fassi, Fazio Rojas, Garona, Gómez Rincón, González, Grisolia, Guglielmelli, Guillot, Güiraldes (h.), Gutiérrez, Harday, Hernández (C.), Hernández (V.), Horne, Illanes, Irigoyen, Jiménez, Labayen, Lanús, Lazo, Lezica Alvear, López

García, López Merino, Maino, Martínez (B. E.), Martínez (F. Benigno), Martínez (G. N.), Méndez Calzada, Montagna Moreno, Mugica, Muniagurria, O'Reilly, Ortiz de Zárate, Osorio Soler, Osorio, Palacio, Pandolfo, Pastor, Paz Posse, Peña (E. S.), Peña (S.), Pérez, Pinto (h.), Pita, Pizarro, Quintana, Radío, Ravnani, Repetto, Reyna, Rocha, Ruggieri, Saá, Saccone, Sáenz, Saneerni Giménez, Sánchez, Schoo Lastra, Solá, Solana, Solari (F. C.), Solari (J. A.), Solís, Susan, Tamborini, Tapia, Teisairé (h.), Vázquez, Vélez, Videla Dorna, Vilech y Zavala Ortiz.

—Por la negativa, los señores diputados: Aguiar, Beristain, Infante, Jaravillo, Ortiz Basualdo y Zunino.

Sr. Pandolfo. — Ya ve el señor diputado Repetto cuál es el «temperamento» de los señores diputados. Le oí decir al señor diputado, cuando se votó la ley de accidentes del trabajo, que estaba emocionado por lo que la Cámara había hecho. Lo mismo podría decirse en esta votación de la Cámara.

—En consideración el artículo 2º.

—Ocupa su asiento, el señor ministro de Agricultura, ingeniero José Padilla.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Quiero decir muy pocas, para explicar mi intervención en esta discusión. Cuando una ley extensa empieza a discutirse en particular, los diputados realizamos una labor de pequeña albañilería, desprovista de vanidad y llena de buena intención. Se trata, sencillamente, de introducir algunas enmiendas a los artículos despachados por la comisión, con el propósito de precisar expresiones y algunas veces de ampliar criterios, siempre persiguiendo el designio de que la ley salga técnicamente mejor redactada y acaso enriquecida con sugerencias de no mucho vuelo, pero posiblemente útiles.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita.

Esa es mi posición en la tarea que emprendemos en este momento y que he calificado de albañilería de arte menor. La inicio proponiendo una supresión en el primer apartado de este artículo. Dice el artículo 2º: «Créase un consejo agrario nacional para aplicar en forma permanente esta ley...» Las leyes una vez pro-

mulgadas no se aplican en forma discontinua o intermitente. Los términos «en forma permanente» son superfluos y afean la sintaxis del artículo. En consecuencia, y sin dar mayor extensión a fundamentos que me parecen obvios, solicito la supresión de esas palabras.

Sr. Presidente (Pita). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Palacio. — Sí, señor presidente.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Desearía que el señor miembro informante explicará el alcance de los términos: «con jurisdicción en todo el país». Este organismo lo crea esta ley; pero la facultad de legislar, juzgar y de resolver corresponde a otro poder.

Por otra parte, quisiera que el señor diputado me fijará el alcance de los términos: «será una institución de derecho público y privado». Porque si el consejo agrario coloniza en las provincias como institución de derecho privado, estará sujeto a la jurisdicción y a las normas que rijan en cada Estado.

Sr. Palacio. — Cuando el artículo dice que el consejo tendrá jurisdicción en todo el país, quiere significar que la ley será aplicable en en toda la República.

En cuanto a la otra observación del señor diputado, el consejo agrario será un órgano descentralizado del Estado, una expresión de la soberanía del mismo y como tal será una institución de derecho público.

Sr. Pizarro. — Y como institución de derecho público, como expresión de la soberanía, ¿el consejo actuará dentro de los Estados provinciales?

Sr. Palacio. — Ya sé que el señor diputado no es partidario de los entes autárquicos, órganos descentralizados del poder del Estado. Este consejo va a ser también un organismo de derecho privado porque va a poder comprar, contratar, adquirir derechos y cuantos actos podría realizar una persona o institución del derecho privado.

Sr. Presidente (Pita). — La Secretaría va a dar lectura del artículo tal como quedaría con la supresión indicada por el señor diputado por la Capital.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El artículo quedaría en la siguiente forma:

«Art. 2º — Créase un consejo agrario nacional para aplicar esta ley, que funcionará con la autonomía que le acuerda la misma y con jurisdicción en todo el país.»

«Será una institución de derecho público y privado, siendo sus miembros personal y solidariamente responsables de los actos del conse-

jo, salvo expresa constancia en acta de quien estuviera en contra de sus resoluciones.»

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Se vota, y resulta afirmativa

Sr. Pandolfo. — Hago indicación para que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pita). — Habiendo asentimiento, así se hará.

—En discusión el artículo 3°

Sr. Susan. — Pido la palabra.

He dicho, hace un momento, que este proyecto preocupa hondamente a los trabajadores rurales.

Tanto es así, que en una carta que he recibido de un auténtico trabajador del campo, inteligente conocedor de estos problemas, presidente de una cooperativa muy importante de la provincia de Santa Fe, se me hacen algunas objeciones respecto a la constitución del consejo agrario, que —entienden ellos— tendrá en sus manos el éxito o el fracaso de la ley. Y hace estas atinadas consideraciones:

«El proyecto en cuestión me parece muy bueno. En él todo ha sido previsto con método y resulta claro el fin que se persigue. Solamente el artículo 3° no determina cómo serán designados los representantes del Banco de la Nación, del Banco Hipotecario, de las cooperativas y consejos agrarios regionales; si lo serán por medio de ternas o por medio de elección directa de los conjuntos de organismos que representan. Quizá se quiera seguir en este caso el sistema de ternas, ya implantados en todos los otros organismos autónomos como ser Comisión Nacional de Granos y Elevadores, etcétera, aunque a mí me parece que sería mejor que las designaciones fuesen hechas directamente por los interesados y no por el Poder Ejecutivo de las listas provistas por éstos».

Tiene importancia la observación. Sería mejor que los consejos regionales y las cooperativas designasen a sus representantes, porque las garantías para sus intereses serían mayores.

Por esa razón, propondría el siguiente agregado que creo no tendrá inconveniente en aceptar la comisión: al final del apartado D, después de las palabras: «consejos agrarios locales» se intercalarían: «los de estos dos serán designados directamente por las entidades interesadas y en la forma en que éstas lo determinen».

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Sobre la constitución del consejo nacional agrario hemos presentado con el señor diputado por la Capital, doctor Anastasi, una proposición modificatoria. Y como hemos presentado una serie de proposiciones tendientes a modificar el articulado de la ley, manifestamos que lo hacemos sin vanidad alguna, con el propósito de mejorarla en lo que fuere posible, pero atendiendo siempre las consideraciones y opiniones de la comisión respectiva que nos merece el mayor respeto.

En este sentido, proponemos agregar al consejo dos miembros más: uno, en representación del Consejo Nacional de Educación, tendente a articular la obra colonizadora con la fase educativa; y, otro, en representación de las entidades agrarias, elegido de una lista de tres personas que propongan las sociedades rurales inscriptas en el Ministerio de Agricultura y reconocidas con personería jurídica.

De tal manera, el consejo tendría en su seno un elemento útil de contralor y una voz autorizada de las entidades agrarias. Sometemos la proposición a la comisión para su aceptación o rechazo, según crea pertinente.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

La comisión no puede aceptar la modificación propuesta por el señor diputado por Santa Fe, porque en la forma en que está redactado el artículo, la designación de los representantes de las entidades agrarias en el consejo agrario será hecha por éstas, de acuerdo al procedimiento que determine el Poder Ejecutivo. De manera que al redactar el artículo, la comisión ha creído oportuno dejar ese punto librado a la reglamentación de la ley.

La proposición del señor diputado por la Capital se refiere a una ampliación del consejo agrario, situación que la comisión ha estudiado detenidamente. La comisión se propuso crear un organismo simple, con número reducido de miembros; no quiso crear un organismo burocrático, en el que se diera amplitud a su directorio, sin mayores ventajas para su desenvolvimiento.

Con ese criterio, la comisión circunscribió el directorio al número de cinco miembros.

Por otra parte, la inclusión de un representante del Consejo Nacional de Educación, por las razones que expresé en el informe en general, la comisión entiende que no corresponde.

Otro tanto podría decir respecto al representante de las sociedades rurales. La comisión no considera necesario incluirlo en este organismo, ya que ha dado representación a otras entida-

des que son expresiones auténticas de los agricultores del país, como los consejos agrarios en los que están representados directamente.

Por esos motivos, la comisión, con mucho sentimiento, tampoco acepta la proposición formulada por el señor diputado por la Capital.

Sr. Susan. — Vistas las razones aducidas por el señor presidente de la comisión, retiro la proposición, entendiendo que al efectuarse la reglamentación respectiva se tendrá en cuenta estos deseos.

Sr. Presidente (Pita). — ¿Insisten en su agregado los señores diputados por la Capital?

Sr. Pinto (h.). — Para abreviar el trámite parlamentario, solicito que cuando se vaya a votar, la Secretaría informe que hay enmiendas y dé cuenta de ellas. Si los señores diputados votan el despacho afirmativamente, quedarán desechadas las enmiendas.

Sr. Lazo. — En el párrafo tercero de este artículo ha habido una omisión. En lugar de decir: «Para funcionamiento...», debe decir: «Para el funcionamiento...»

Sr. Palacio. — Sí, señor diputado

Sr. Barrau. — El párrafo tercero dispone que para el funcionamiento del directorio se requiere la asistencia por lo menos de dos tercios de los miembros. Como son cinco, los dos tercios serían 3,33. Yo propondría que se dijera que deben ser cuatro.

Sr. Palacio. — Deben ser cuatro. Acepta la comisión.

Sr. Mugica. — Convendría que se leyera las enmiendas.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — La única enmienda al artículo 3º —no aceptada por la comisión— que es mantenida por sus autores, es la de los señores diputados Anastasi y Pinto, que proponen elevar el número de miembros del consejo agrario nacional a siete, agregando a los que dice el despacho, dos más: uno, en representación del Consejo Nacional de Educación y otro, en representación de las entidades agrarias, elegidos de una lista de tres personas que propongan las sociedades rurales inscriptas en el Ministerio de Agricultura y reconocidas con personería jurídica.

La otra enmienda, aceptada por la comisión, se refiere al quórum para el funcionamiento del directorio. El párrafo tercero queda así: «Para el funcionamiento del directorio se requiere la asistencia de cuatro de sus miembros.»

Sr. Mugica. — Queda entendido que se pondrá a votación el despacho con la enmienda aceptada.

Sr. Presidente (Pita). — Sí, señor diputado, porque entra a formar parte del despacho. Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Hernández (C.). — ¿Cómo queda redactada esa parte del artículo?

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Ha quedado así: «Para el funcionamiento del directorio se requiere la asistencia de cuatro de sus miembros».

Sr. Presidente (Pita). — Ya ha sido aprobado.

—Sin observación, se vota y aprueba el artículo 4º.

—En consideración el artículo 5º.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Como todos tenemos en nuestras bancas el despacho, me parece sería conveniente escuchar primero las proposiciones que se formulen.

Voy a pedir la substitución del artículo 5º por otro que diría así: «La remuneración del presidente y miembros del directorio será fijada anualmente por la ley general de presupuesto de la Nación»; y voy a fundar brevemente la proposición.

La fijación de sueldos por leyes especiales para estas instituciones de carácter autárquico que se han multiplicado en los últimos tiempos, implica un error que casi me atrevería a llamar una corruptela. Introduce un desconcierto dentro del régimen de sueldos de la administración pública, porque fija las retribuciones con un criterio tan generoso que coloca en situación de inferioridad evidente a los funcionarios que forman lo que podríamos llamar el cuadro permanente de la administración.

No quiero ser prolijo, pero podría citar numerosos casos de instituciones autárquicas en que las remuneraciones son tan elevadas que superan los sueldos pagados por el Estado a altos funcionarios públicos que tienen a su cargo la responsabilidad de reparticiones de gran importancia como la Dirección General de Correos y Telégrafos, la presidencia del Consejo Nacional de Educación, la presidencia del Departamento Nacional de Higiene, la de Obras de Salubridad y otras más que están presentes en la memoria de todos. Agregaré el caso de los subsecretarios de los ministerios que colaboran con los señores ministros y son sus asesores de primer orden, siendo, en realidad, jefes de la administración de los respectivos departamen-

tos. Como esos funcionarios continuaban recibiendo los sueldos que se fijaron hace veinte o treinta años y que pudieran ser elevados entonces y que acaso ahora todavía respondan a las exigencias de un nivel de vida determinado, es evidente que están en inferioridad con respecto a estos otros funcionarios nuevos, de carácter tal vez transitorio, a quienes se acuerdan rumbosas remuneraciones, no teniendo en cuenta quizá la verdadera medida de su responsabilidad, ni el desconcierto, repito, introducido en el sistema de remuneraciones de la administración.

Por una parte, ése es el fundamento principal de mi proposición y el segundo es éste: los sueldos fijados por ley se hacen más difíciles de modificar o reducir que los que se establecen anualmente por la de presupuesto, porque en ciertos casos se exigiría una derogación expresa de estas disposiciones para adecuarlas al nivel general de remuneraciones, que en un momento dado el Estado se vea obligado a establecer hasta por razón de penurias financieras que no parecen del todo alejadas.

Por eso —y no queriendo abundar en mayores razones, porque me parece que lo que he dicho es suficiente para llevar al ánimo de los señores diputados el fundamento de mi proposición— propongo que se incorpore este artículo: «los sueldos se fijarán anualmente por la ley de presupuesto, siguiendo el régimen corriente de la administración pública argentina».

Sr. Presidente (Pita). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Palacio. — Sí, señor presidente. Puede cambiarse la redacción diciendo: «Las remuneraciones del presidente y vocales se fijarán anualmente por la ley de presupuesto».

Sr. Ravignani. — Esto es de acuerdo con la disposición del inciso 7º del artículo 67 de la Constitución nacional. Porque importa un gasto, tiene que fijarse anualmente.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Artículo 5º: La remuneración del presidente y la de los directores será fijada anualmente por la ley general de presupuesto de la Nación».

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 75 votos. Votan 81 señores diputados.

—En consideración el artículo 6º.

Sr. Castex. — Pido la palabra.

Este artículo sorprende, porque o hay evi-

dentemente un error, o se incorpora a la legislación argentina una nueva inhabilitación, ya que entre los que están impedidos para ser miembros del consejo agrario se fijan los que hubiesen sido procesados por delitos comunes. Hasta ahora el proceso no ha sido motivo de inhabilitación, y yo desearía saber si la comisión ha colocado deliberadamente la expresión o es un error y ha puesto «procesado», en lugar de «condenado».

Sr. Anastasi. — Sobre todo, con los antecedentes que he citado en esta Cámara, de que, de acuerdo con las estadísticas, de cada cien procesados, diez son condenados y noventa absueltos.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

La comisión ha creído que las personas que integren este consejo agrario deben ser de una gran solvencia moral. Evidentemente que el procesado que termina con un sobreseimiento definitivo, no tiene una inhabilitación en general. Pero el señor diputado sabe que muchas veces, cuando se hacen procesos, el procesado no es condenado en razón de la falta de pruebas. Pero el solo hecho de existir un proceso implica que esa persona sea de moral dudosa. No vemos la necesidad de que se recurra a esa clase de gente para formar parte de este directorio, cuando hay tantas personas que no han sufrido nunca proceso. Tiene, pues, el artículo 1º ese alto concepto de moral.

Sr. Castex. — Voy a formular una modificación al inciso: que se reemplace el término «procesado» por «condenado». Las razones aducidas por el señor miembro informante con todo el respeto que ellas puedan merecer, no son convincentes, pues como muy bien lo ha hecho notar un colega, cuando no hay condena la presunción es de inocencia.

Y, por otra parte, así como hay muchos procesados que eluden la condena por falta de pruebas o por prescripción, sabe también el señor diputado que hay muchos procesos fabricados a personas honestas con fines que no entro a analizar.

Sr. Palacio. — Terminan con el sobreseimiento en la causa.

Sr. Castex. — Terminan con el sobreseimiento y también pueden terminar con la prescripción de la causa, y no va a ser posible que se haga la discriminación de aquellos que no han sido condenados por falta de pruebas y aquellos que no lo han sido por ser inocentes.

De manera, que el hecho de haber sido procesado no puede constituir una inhabilitación. Hay delitos que la justicia de instrucción, en

muchos casos y especialmente en las provincias a cargo de las policías, han fabricado con toda facilidad. Me refiero a los delitos de sedición, de rebelión...

Sr. Anastasi. — Por ejemplo, el famoso desacato.

Sr. Castex. — ... el desacato y otros delitos, que aunque sean tales, no pueden inhabilitar. Muchas veces, por otra parte, ha delinquido el hombre honesto que reacciona ante una ofensa grave y esto no lo puede inhabilitar para formar parte de este consejo agrario.

Por eso propongo que en cambio de la palabra «procesados» se diga: «condenados por delitos comunes que no afecten a la dignidad de la persona».

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Voy a observar dos expresiones en los incisos a) y c).

En el inciso a) se establece: «los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los de la enseñanza.» Solicito que en lugar de las palabras «de la enseñanza» se ponga «del profesorado». Fundamento este cambio en la circunstancia de que en la enseñanza existen empleos administrativos que no tienen la absoluta independencia que posee el profesor.

En el inciso c) hay una expresión que no debe incluirse en ninguna ley. Dice el inciso: «... explotación de bosques, yerbales o algodonales, etcétera...» En las leyes no cabe nunca la expresión «etcétera»; deben asentarse términos concretos.

Solicito, en consecuencia, que la comisión acepte las modificaciones que he propuesto.

Sr. Palacio. — La comisión acepta la substitución de las palabras «de la enseñanza» por «del profesorado» en el inciso a).

Sr. Horne. — Con respecto al agregado propuesto por el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, la comisión acepta únicamente el cambio del término «procesado» por «condenado».

Sr. Cisneros. — Yo le pediría a la comisión que aceptara, por las razones dadas por el señor diputado Castex, la supresión del inciso c). Está librado al criterio de los que van a elegir esos miembros saberlos seleccionar, sobre todo cuando son entidades responsables a cuyo cargo está esa elección. Así nos evitamos estos conflictos e interpretaciones.

Sr. Barrau. — Pido la palabra.

En el inciso a) del artículo que estamos discutiendo, noto que según la redacción que tiene no podrán formar parte del consejo nacio-

nal agrario los representantes de los bancos oficiales, Hipotecario Nacional y Banco de la Nación Argentina, a que se refiere el artículo 3º. Quedarían excluidos, puesto que la única excepción sería para los de la enseñanza.

Sr. Palacio. — Evidentemente que pueden formar parte.

Sr. Barrau. — Según la redacción, no. La única excepción que establece el inciso es la de la enseñanza.

Sr. Palacio. — Pero anteriormente se ha dispuesto que pueden formar parte del consejo los representantes del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional. De modo que este artículo no se refiere a estos funcionarios.

Sr. Barrau. — Pero los representantes pueden no formar parte de los directorios respectivos, porque los bancos pueden designar un tercero para esas funciones. De manera que es pertinente mi observación.

Sr. Presidente (Pita). — ¿Qué propone el señor diputado?

Sr. Barrau. — Propongo agregar al final del inciso a) del artículo 6º: «y representantes de los bancos indicados en el artículo 3º», que son, concretamente, el Banco Hipotecario Nacional, el Banco de la Nación Argentina, y los bancos oficiales, únicas instituciones que pueden indicar representantes dentro del directorio.

Sr. Lazo. — El asunto que se ha planteado, tiene más importancia que la que aparentemente me muestra.

Sr. Barrau. — La tiene y por eso la planteo.

Sr. Lazo. — O se admite que los miembros de los directorios de esos bancos, que ya gozan de una remuneración, tienen que formar parte del directorio del consejo agrario o se admite que deben designar representantes ajenos a esos directorios. De manera que no es una simple cuestión de interpretación: hay que aclarar bien y la comisión debe expresar si admite que los miembros de esos directorios pueden o no formar parte del consejo agrario. Una vez que se haya expedido la comisión, se resolverá la redacción del inciso.

Sr. Barrau. — La oportunidad es ahora, en que estamos tratando este artículo.

Sr. Labayen. — Pido la palabra.

Como miembro de la comisión he votado en el seno de la misma, este artículo tal cual está redactado, con el criterio de que, los miembros de los directorios del Banco de la Nación e Hipotecario Nacional, no pueden ser miembros del consejo agrario y que esos directorios pueden nombrar representantes para integrar ese

consejo. Me baso, en primer lugar, en que habría superposición de funciones, que serán muy grandes en este organismo, con las ya pesadas del organismo bancario a que pertenecieran; y en, segundo lugar, en la razón que ha dado el señor diputado, referentes a la remuneración.

No sé lo que piensa el resto de mis compañeros de comisión, pero con lo expresado aclaro el sentido con que voté este artículo del despacho en el seno de la comisión.

Sr. Barrau. — Desearía conocer la opinión de la comisión, porque la considero fundamental en este caso y porque de ello depende que insista o retire el agregado.

Sr. Horne. — La comisión entiende exactamente lo mismo que ha manifestado el señor diputado Labayen, que es el concepto bien claro del inciso a), del artículo 6°.

Sr. Ravignani. — Que no se pueden acumular las dos funciones.

Sr. Barrau. — Con la aclaración de la comisión, de que los miembros de los directorios de los bancos oficiales no deben formar parte del directorio del consejo agrario nacional, está ahora de más, el agregado que propuse al inciso a).

Sr. Lazo. — Así es.

Sr. Barrau. — Me felicito de haber provocado este pequeño debate porque de esa manera se ha aclarado esta parte de la ley, que también había preocupado al señor diputado por Santa Fe.

Sr. Iriondo. — Pido la palabra.

Pediría al señor miembro informante que aclarase si se acepta la supresión o modificación del inciso e), porque por mi parte voy a apoyar la moción formulada por el señor diputado Cisneros en el sentido de la supresión.

Se trata de una inhabilidad de tal naturaleza que creo no es necesario establecer especialmente.

Sr. Palacio. — La comisión acepta que se sustituya la palabra «procesados» por «condenados»; pero no acepta la supresión del inciso e).

Sr. Iriondo. — Es tan evidente, que no se debería poner nada en la ley.

Sr. Palacio. — Es que hay condenados que con el andar del tiempo se olvidan que han sido tales y forman parte de los directorios. Los que hayan sido condenados no pueden formar parte de ninguna manera de este consejo agrario nacional.

Sr. Fassi. — Por mi parte, apoyo la indicación formulada por el señor diputado Cisneros.

El juicio por delito común trae como acceso-
ria a la condena la inhabilidad, que tiene un

término determinado en el Código Penal, transcurrido el cual no es posible que la sociedad mantenga esa inhabilidad por una ley especial, y lo declare inhabilitado para formar parte del consejo agrario. El condenado en juicio que ha cumplido su condena es un ciudadano que puede ocupar las más altas posiciones de nuestro país, puede sentarse en este Congreso. Ese hombre, después de cumplir la condena y haber demostrado con su conducta honrada una rehabilitación que lo convierte en ciudadano apto y digno, no puede llevar como un estigma, la circunstancia de haber sido una vez condenado por un delito común.

Dentro del concepto de delito común entran algunos que no significan, por cierto, un desmedro, como, por ejemplo, el delito de homicidio por imprudencia. Nosotros estableceríamos que un ciudadano habilitado por sus conocimientos para desempeñarse honesta y eficazmente en un directorio, se vería impedido de hacerlo por la circunstancia de que, conduciendo su automóvil, hubiese incurrido en el delito de homicidio por imprudencia.

Creo que esta disposición de la ley podría producir situaciones de flagrante injusticia. Creo que ni el Banco de la Nación, ni el Banco Hipotecario, ni el Poder Ejecutivo llevarán al directorio del consejo agrario a personas que hayan incurrido en delitos que los marquen en forma indeleble, inhabilitándolos para desempeñar funciones de esta importancia.

Si debemos confiar en que los directores de esas entidades y el Poder Ejecutivo por lógico discernimiento no hagan nombramientos de esa naturaleza, no es posible que lleguemos al extremo de sancionar disposiciones como ésta, que podrían crear, como digo, situaciones de evidente injusticia.

Sr. Cisneros. — ¿Qué propone el señor diputado?

Sr. Castex. — Adhiero a la indicación formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Palacio. — La comisión acepta la sustitución de la palabra «procesados» por «condenados».

Sr. Presidente (Pita). — La Presidencia entiende que a los efectos de ordenar mejor la votación, corresponde votar inciso por inciso.

—Asentimiento.

Sr. Ravignani. — Que se dé lectura por Secretaría.

Sr. Presidente (Pita). — Sí, señor diputado.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Inciso a): Los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los del profesorado».

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Inciso b): Los jubilados nacionales, provinciales o municipales».

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Inciso c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales o algodones, etcétera, o de empresas colonizadoras».

Sr. Ravignani. — Propongo que en lugar de la palabra «o algodones, etcétera», se diga «algodones, o industrias análogas...».

Sr. Secretario (González Bonorino). — Quedaría en esta forma: «c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales, algodones, o industrias análogas, o de empresas colonizadoras».

Sr. Presidente (Pita). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Palacio. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «d) Los que se hallen en estado de quiebra, concurso civil o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores.»

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Se aprueba.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «e) Los que hubiesen sido condenados por delitos comunes...»

Sr. Ruggieri. — Como se han hecho varias indicaciones relativas a este inciso, yo pediría a la comisión aceptara la siguiente redacción: «Los que hubiesen sido condenados por delitos que afecten su dignidad». Dejaríamos así librado al criterio del poder público o de las instituciones representadas en el consejo, el juicio

sobre la naturaleza del delito por el cual ha sido condenada esa persona.

Sr. Anastasi. — Lo más lógico es la supresión del inciso. Por ejemplo, un abogado que haya publicado un escrito que algún funcionario judicial considere molesto y que dé ocasión a una condena condicional por desacato, estaría inhabilitado para formar parte del consejo.

Sr. Ruggieri. — En ese caso no, porque el delito no afectaría la dignidad de la persona.

Sr. Presidente (Pita). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Palacio. — No.

Sr. Horne. — No acepta, porque el inciso especifica bien que debe tratarse de delitos comunes.

Sr. Lazo. — Voy a votar en contra del inciso en la forma propuesta por la comisión, en la inteligencia de que quedará suprimido.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar el inciso, en la forma aceptada por la comisión, o sea, substituyendo la palabra «procesados» por «condenados».

—Resulta afirmativa de 48 votos, sobre 88.

Sr. Iriondo. — Que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a rectificar.

—Rectificada la votación, resulta negativa de 39 votos, sobre 89.

Sr. Presidente (Pita). — Queda rechazado el inciso e).

—En discusión el artículo 7°.

Sr. Cisneros. — Pido la palabra.

Voy a proponer un agregado, que podría fundar brevemente, para que se lo tuviera en cuenta y se lo ubicara en el lugar que se estime conveniente.

Sr. Anastasi. — El señor diputado debe precisar el lugar de la ubicación del inciso, para que la discusión se concrete a él.

Sr. Ravignani. — Convendría discutir inciso por inciso, porque son muchos, y que el señor diputado proponga el agregado en el que corresponda.

Sr. Guillot. — Quiere decir, que este artículo lo discutiremos inciso por inciso.

—Asentimiento.

—Se da por aprobado el inciso a).

—En discusión el inciso b).

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Voy a insistir en una observación formulada hoy al pasar, cuando hablaba el señor diputado por Córdoba, doctor Pizarro y a propósito de ciertas manifestaciones del señor diputado Repetto.

Considero que en este inciso la palabra «pequeñas» puede contrariar los propósitos de la ley obstaculizando su ejecución. Tratándose de superficies, el adjetivo «pequeñas» debe referirse forzosamente a extensiones. En consecuencia, una propiedad pequeña, debe ser una propiedad no extensa; y la misma ley en su artículo 21 define el carácter que debe tener la unidad económica agraria que se llama chacra y que debe ser entregada a cada uno de los aspirantes a convertirse en propietarios. Si decimos aquí que estas propiedades deben ser «pequeñas» en el único sentido posible —no extensas— acaso pongamos en conflicto esta disposición con el más amplio concepto del artículo 21. Sabido es que tratándose de unidades económicas, el término «pequeñas» acaso no se adapte al concepto de superficie. Recojo una observación formulada por el Centro de Ingenieros Agrónomos en un folleto interesante y donde hay sagaces observaciones respecto a este problema. Ahí se dice que es difícil determinar cuál debe ser la unidad económica agraria, pero las observaciones permiten comprobar a la vez el fracaso del parcelamiento excesivo y la subsistencia de chacras amplias.

Se refiere que en la zona de Tres Arroyos, por ejemplo —aludiendo a la ley de colonización de la provincia de Buenos Aires— el empleo de la máquina cosechadora, que tienen casi todos los arrendatarios, requiere una extensión no menor de 200 hectáreas que, a un precio promedio de \$ 200 m/n. la hectárea, representa un capital mínimo de \$ 40.000 m/n., sin contar las mejoras utilizables, a lo que debe agregarse una vivienda mínima, que con las más rudimentarias exigencias importa no menos de \$ 3.000 m/n. Extensiones reducidas de menos de 50 hectáreas inciden pesadamente y a \$ 60 la hectárea significan una elevación en el servicio de más de \$ 2 la hectárea.

El diputado por Entre Ríos, doctor Horne, conoce, por ejemplo, la forma en que se ha parcelado la propiedad en Colón, Entre Ríos, de acuerdo con la vieja ley de Urquiza. Allí se adjudicaron concesiones de 27 hectáreas, que bastan a sustentar una familia.

Esas son decididamente propiedades pequeñas; pero no puede aplicarse el mismo criterio en la Patagonia o en regiones de cultivo de secano en que es forzoso dar gran extensión

al predio y, sin embargo, el valor venal de la propiedad sería pequeño.

Sin desear extenderme mayormente, y con la esperanza de que me acompañe la buena fortuna, que hasta ahora me ha asistido en mis proposiciones de enmienda a este proyecto, solicito la supresión de la palabra «pequeñas» para que la extensión y valor de la propiedad queden especificadas solamente en el artículo 21.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Para apoyar la proposición del señor diputado por la Capital.

Sr. Horne. — La comisión está de acuerdo.

Sr. Anastasi. — Quiero agregar otra consideración más: se permitirá al consejo agrario crear propiedades colectivas cuando así lo considere conveniente. De otra manera estaría cohibido en el ejercicio de esa facultad.

Sr. Amadeo y Videla (h.). — Con respecto al concepto de «pequeñas», no se trata en rigor de fijar una extensión exacta que lo defina, sino que el espíritu que se ha querido dar a esta disposición legal alude a la menor propiedad posible dentro del sistema de una explotación que la técnica aconseja y que en cada zona puede ser distinta.

Ese es el verdadero sentido del vocablo.

Sr. Guillot. — Así lo he entendido, y por eso me pareció que estaba bien explicado en el artículo 21.

Sr. Horne. — Ese es el concepto de la ley.

Sr. Anastasi. — Es interesante recalcarlo para que no quede duda al respecto.

Sr. Palacio. — La extensión ha de ser distinta, según la clase de tierras de que se trate.

Sr. Presidente (Pita). — La comisión ha aceptado la supresión de la palabra «pequeñas».

Sr. Repetto. — Ha quedado aclarado que la extensión de las propiedades rurales a que se alude en este inciso, ha de estar ajustada a una explotación económica que dé trabajo a una familia. Una familia podrá vivir en tantas hectáreas. En un caso necesitará 200 y en otro 500. Y esa es la propiedad a que se alude.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer el inciso, en la forma aceptada por la comisión.

—Se lee:

b) Estudiar planes de constitución de propiedades rurales que contemplen metódica y progresivamente todo el territorio de la República, teniendo en cuenta las características agrícolas de cada zona, las vías de comunicación, distancia de los mercados consumidores, estaciones y puertos de embarque y distribución de la población en el país, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Se lee:

c) Convenir con los bancos oficiales o instituciones autárquicas del Estado, la incorporación al régimen de la presente ley de los inmuebles de su propiedad, o que estuvieran gravados a aquéllos, en las condiciones que se estipulen.

Sr. Presidente (Pita). — En consideración.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Quisiera que se me explicara el alcance de la expresión «o que estuvieran gravados a aquéllos». ¿Se trata de propiedades en poder de un banco oficial o en poder de un tercero? Si está en poder del propietario, el hecho de que esté gravada la propiedad no importa la pérdida de su derecho.

Sr. Palacio. — Se refiere el inciso a las propiedades que están en dominio efectivo del Banco y a las propiedades gravadas, respecto a las cuales los bancos han hecho arreglos con sus deudores. Evidentemente que la transferencia sería hecha con el consentimiento del propietario.

Sr. Pizarro. — Si la propiedad ha pasado a poder del Banco en virtud de un arreglo con el deudor, la propiedad ya no está gravada y es el Banco el que la transfiere.

Pediría a la comisión que suprima las palabras «o que estuvieran gravados a aquéllos.»

Sr. Palacio. — El concepto de la ley es más amplio: la ley quiere operar en base a los inmuebles en propiedad de los bancos. Los que están gravados son susceptibles también de ser transferidos.

Sr. Pizarro. — ¿Y si el propietario se niega a la transferencia?

Sr. Palacio. — No se haría.

Sr. Pizarro. — Entonces, la disposición del inciso no tiene sentido.

Sr. Presidente (Pita). — ¿Acepta la comisión la supresión?

Sr. Palacio. — No, señor presidente.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Las palabras referentes a los inmuebles gravados deben suprimirse hasta por un motivo de concordancia con todo el régimen de la ley.

Por este proyecto se establece que el consejo agrario no puede adquirir tierras de particulares sino en remates judiciales, en remates del Banco Hipotecario, por medio de la expropiación y por medio de la licitación pública. Quiere decir que se trata de evitar que el consejo agrario realice operaciones con particulares.

Sin embargo, este inciso proporcionaría un procedimiento indirecto para realizar esas operaciones con particulares. Bastaría que un inmueble gravado al Banco de la Nación o al Banco Hipotecario fuera objeto de un arreglo de carácter privado entre él y el consejo agrario deudor, para que la tierra fuera transferida luego al consejo agrario nacional.

Me parece más conveniente que este inciso se refiera exclusivamente a la tierra que es propiedad de los bancos y no a aquella que estuviera gravada en los mismos, porque en tal supuesto siempre nos encontraríamos ante una transacción privada entre los particulares y el consejo agrario nacional.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar en primer término el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

— En consideración el inciso d).

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Este inciso no es completo, porque así como existen remates judiciales y remates ordenados por el Banco Hipotecario Nacional, que tiene por su ley orgánica facultad para sacar a subasta los bienes de sus deudores, hay bancos provinciales que tienen esa misma facultad. Tal es el caso del de la provincia de Buenos Aires. Cuando discutimos la ley de moratoria hipotecaria tuvimos en cuenta esta circunstancia.

Propongo que a continuación de «Banco Hipotecario Nacional», se agregue: «... o bancos de provincias que por sus leyes orgánicas estén facultados a proceder a la subasta de las propiedades de sus deudores...»

Sr. Palacio. — La comisión acepta, porque el concepto es que el consejo agrario pueda adquirir bienes que se ofrezcan a la venta, ya sea en remates judiciales o de instituciones bancarias.

Sr. Barran. — Pido la palabra.

Creo que el agregado que propone el señor diputado por la Capital en lugar de aclarar, va a confundir, porque al hacer la enumeración parecería quedar eliminadas otras instituciones que pueden sacar a remate, como, por ejemplo, el Instituto Movilizador.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

El señor diputado incurre en un error con respecto a mi pensamiento.

Lo que se desea con este inciso es determinar que la adquisición debe hacerse con la garantía que significa el remate judicial. Pero la co-

misión se ha encontrado con la circunstancia de que el Banco Hipotecario Nacional cuando ejecuta a los deudores no necesita acudir a la justicia. Pero observo a mi vez que ciertos bancos de provincia están en la misma situación. Así el Banco de la Provincia de Buenos Aires frente a un deudor moroso, puede proceder igual que el Banco Hipotecario Nacional, es decir, subastar sin intervención de la justicia. En ese supuesto ¿podemos nosotros entender que el consejo agrario nacional no tiene facultades de concurrir a la subasta para adquirir? Sería crear una situación de diferencia con respecto al Banco Hipotecario Nacional que no tendría ninguna significación, y sería en desmedro de este deseo nuestro de que la acción del consejo agrario nacional vaya a todos los extremos de la República. Por eso me refiero exclusivamente a los bancos provinciales, es decir, a aquellos que por su carta orgánica pueden tener facultades de subastar sin intervención de la justicia y no puedo referirme a las demás instituciones bancarias privadas, porque éstas para vender necesitan recurrir a la justicia.

Creo dejar claramente expresado mi pensamiento y demostrada la conveniencia de la inclusión que la comisión ha aceptado.

Sr. Barrau. — Entiendo muy bien lo que quiere decir el señor diputado por la Capital, pero me parece que con el agregado que yo proponía era más completo el pensamiento.

Sr. Repetto. — Lea el señor diputado el inciso siguiente y verá que el caso que citaba está comprendido.

Sr. Fassi. — Ese inciso siguiente no puedo leerlo sino relacionándolo con los otros en cuya virtud las adquisiciones de las tierras sólo podrían hacerse por licitación o remate público, que yo entiendo que en este caso debe haberse tomado como sinónimo de remate judicial. Quiere decir que el inciso siguiente es observable, como lo destacaré en oportunidad.

Sr. Horne. — La comisión ha aceptado el agregado.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer.

—Se lee:

a) Adquirir inmuebles del dominio privado en remate judicial o del Banco Hipotecario Nacional o bancos de provincia, que por sus leyes orgánicas estén facultados a proceder a la subasta de propiedades de sus deudores.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En consideración el inciso e).

Sr. Fassi. — Pido la palabra, para manifestar la duda que me inspira la redacción.

Según ya cité, de acuerdo al concepto de los artículos 10 y 11, no sería posible la adquisición directa de tierras por el consejo agrario, y sin embargo, este inciso expresa una solución distinta. Desearía que la comisión nos diera su interpretación auténtica, es decir, nos dijera si el consejo agrario nacional está en condiciones de proceder a la adquisición directa de tierras fuera del remate judicial o si, por el contrario, debe correlacionarse el inciso e) e interpretarse con sujeción a las disposiciones de los artículos 10 y 11.

Sr. Ravignani. — Creo que debe correlacionarse.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Este capítulo se refiere a las facultades que tendrá el consejo agrario, y entre ellas se establece la de adquirir inmuebles, entendiéndose que la adquisición ha de verificarse dentro de las normas que establece la ley, a saber: la licitación, la expropiación o el remate público.

Sr. Ravignani. — Propongo la concordancia de las disposiciones con la siguiente redacción: adquirir directamente inmuebles, en cualquier punto del país, con sujeción a las disposiciones de los artículos 10 y 11.

Sr. Palacio. — No es necesario. La comisión no acepta la modificación, por las razones que he expuesto.

Sr. Fassi. — En todo caso queda aclarado el concepto en el sentido de que no podrá adquirir tierras privadamente sino por medio de licitación o en remate judicial.

Sr. Lazo. — Podrá ser ese el pensamiento de la comisión, pero no lo que expresa el texto. Dice el inciso que podrá adquirir directamente; de manera que podría presentarse cualquier latifundista a vender su propiedad, y el consejo agrario podría adquirírsela directamente. ¿Por qué no se acepta el agregado propuesto por el señor diputado Ravignani?

Sr. Palacio. — Como la disposición se refiere simplemente a las facultades del consejo agrario no se ha creído necesario establecer la forma de adquirir.

Sr. Lazo. — Precisamente porque se trata de facultades es que queremos restringirlas, para que no existan facultades tan amplias sino sujetas a los artículos 10 y 11.

Sr. Guillot. — El señor miembro informante dijo, al dar su explicación, que con este inciso se faculta al consejo agrario a adquirir inmue-

bles; prescindió de la palabra «directamente», y esa omisión debe responder a que ya lo había hecho mentalmente. Porque el término «directamente» es el que produce confusión. Si se dijera simplemente «adquirir», se sabría que esa facultad está condicionada por los artículos 10 y 11 y no quedaría duda alguna.

Sr. Palacio. — Acepto que se suprima la palabra «directamente».

Sr. Lazo. — Ahora queda restringida la facultad.

Sr. Pizarro. — Que quede constancia de mi voto en contra.

Sr. Presidente (Pita). — Queda constancia.

Se va a votar el inciso e) con la supresión de la palabra «directamente».

— Resulta afirmativa.

— En consideración el inciso f).

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra

Para proponer un agregado al inciso f) del artículo 7º, que abrigo la esperanza merecerá la aprobación de la comisión.

Tiende el agregado a vincular la acción del consejo agrario nacional con la Organización Internacional del Trabajo, a los efectos de una acertada política inmigratoria. Dice así: «y establecer relaciones con la Organización Internacional del Trabajo por intermedio de su consejo de administración, a fin de convenir la mejor manera de establecer y radicar en las zonas de colonización, agricultores inmigrantes».

El inciso f) acepta la posibilidad de que el consejo convenga la atracción de familias o de grupos de inmigrantes en el extranjero para radicarlos en la República directamente. Entonces no hay ningún inconveniente en que el consejo tenga relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, tanto más cuanto que en virtud de la ley número 11.722 la República ha adherido a la Sociedad de las Naciones y al pacto de la misma y por ende a la Organización Internacional del Trabajo que constituye parte integrante de la Sociedad de las Naciones.

De tal suerte habremos incorporado al régimen de la ley un principio progresista, habremos vinculado orgánicamente la colonización con la inmigración y habremos aproximado un instituto argentino a esa gran organización jurídica que se denomina Organización Internacional del Trabajo.

Nada más.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Considero que mi proposición no es incom-

patible con la formulada por mi compañero y colega de sector, doctor Pinto.

De acuerdo al texto que he depositado en Secretaría, yo propongo la substitución de este inciso f) por el que pido se sirva leer el señor secretario, a fin de que al fundarlo tenga conocimiento de él la Cámara.

Sr. Presidente (Pita). — Se dará lectura.

Sr. Secretario (González Bonorino). — La substitución propuesta por el señor diputado por la Capital es la siguiente: «Inciso f) Organizar la población agraria existente en el país, contemplando también la necesidad de trasladar a zonas agrícolas más adecuadas a los agricultores radicados en zonas menos aptas. Celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero, para radicarlas en la República mediante contratos de compraventa o de arrendamiento con sujeción a las condiciones establecidas por esta ley. También podrá celebrar con los mismos fines iguales convenios con empresas privadas o instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad, dando preferencia a las entidades que no persigan fines lucrativos».

Sr. Guillot. — Cuando la discusión de la ley en general, tuve la oportunidad de observar que esta ley, en cierto sentido, era una ley de colonización interna y anuncié que se le plantearía al consejo agrario el problema de la traslación de los agricultores dentro del territorio nacional.

Observo que en los enunciados generales respecto a facultades y deberes del consejo nacional agrario se omite esa función de organizar la población agraria argentina, operando las traslaciones de hombres que sea necesario trasportar de un punto a otro de la República, a fin de que la labor agrícola no se realice en tierras ineptas, sino dentro de las que ofrezcan condiciones más remunerativas de producción.

Declaro que ese concepto enunciado entonces ha sido bien concretado por el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, a cuyo estudio me he referido anteriormente y que propone como apartado anterior al que contiene el inciso f) una disposición como la que acaba de ser leída, que consiste en organizar la población agraria existente en el país, contemplando también la necesidad de trasladar a zonas agrícolas más adecuadas a los agricultores radicados en zonas menos aptas.

Estoy seguro de que este es el pensamiento de

los autores del despacho. Lo he oído al señor miembro informante y a casi todos los diputados que lo han propugnado, pero no está especificado en los enunciados generales. De ahí que me parezca oportuno precisarlo en la forma expresada en el proyecto que acaba de ser leído.

El Centro de Ingenieros Agrónomos funda muy bien esta proposición; y por provenir de hombres que por razones profesionales se consagran al estudio de los problemas agrarios, me parece conveniente leer alguna de sus manifestaciones a fin de que la Cámara advierta como técnicos en esta materia fundan esa aspiración. Dice: «...en numerosas regiones del país donde las explotaciones netamente agrícolas han resultado un fracaso rotundo la persistencia de la población agrícola relativamente numerosa en ella, sólo se explica por la propia descapitalización de los colonos. Estos, improvisados o venidos de otras zonas más ricas, en los momentos iniciales invirtieron su capital y el producto de las primeras cosechas en la adquisición de tierras y maquinarias. Poco a poco, los malos años determinaron la pérdida de este capital inicial, quedándoles sólo los implementos. Un poco por rutina y otro por falta de capital para evolucionar hacia otra explotación, continúan año tras año cultivando los campos y sembrando malas semillas, obteniendo una cosecha mediana y varias malas, sin ninguna perspectiva de progreso, determinando el pauperismo agrícola y restando energías útiles a la producción nacional. Es esta la situación especial que debe contemplarse en muchas zonas. Hay en ellas una población de agricultores, ex propietarios muchos de ellos, cuyo único capital son sus implementos de trabajo, unas pocas lecheras y su experiencia de las modalidades de la explotación. Este material humano es en su mayoría aprovechable a los fines de la colonización y merece ayuda; bien orientado por una dirección eficiente y colocado en condiciones que le resulta fácil el cumplimiento de sus contratos y obligaciones, podrán rehacer su capital y por ende transformar en positivas sus actuales condiciones».

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Esto, con referencia a parte de la población agraria argentina que esta ley tiende a favorecer.

Otro aspecto de la cuestión contempla, no a los ex propietarios o a los propietarios actuales que cultivan tierras inferiores, sino a los habi-

tantes del campo que tienen nociones del cultivo, pero que no pueden obtener explotaciones remunerativas en las zonas en que viven y que en cambio podrán ser trasladados a otros puntos de la República en donde se les entregarían tierras más aptas para la producción. A ese fin tiende el enunciado general, que por otra parte está desarrollado en distintas disposiciones incorporadas al articulado de la misma ley.

De manera que entiendo que este punto no ha de merecer oposición de la Comisión de Legislación Agraria.

Ahora, la segunda parte del artículo —y lo tendré que fundar con cierta extensión cién dome, empero, estrictamente al tema, a fin de probar su oportunidad— contempla el problema de la colonización privada por medio de agricultores extranjeros.

El inciso f) del artículo 7º habla en primer término de convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero y en segundo término se refiere a convenios con instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad. He creído más conducente dividir en dos proposiciones estas formas de la colonización con extranjeros, estableciendo por separado la facultad de convenir con grupos de familias que reúnan las condiciones establecidas por la ley para dar acceso a las tierras colonizables a los agricultores que pretenden hacerse propietarios de ellas.

Creo haber simplificado el texto del inciso f) cuando elimino lo de que «dispongan de medios, o darles opción de compras», etcétera, porque con decir «con sujeción a las disposiciones de esta ley» ya queda establecido que tendrán que disponer de medios y que estarán capacitados, en caso de ser arrendatarios, para convertirse en propietarios si cumplen con las obligaciones que la ley les crea.

Ahora, en lo que se refiere a las empresas privadas, hago una distinción que me parece importante. El proyecto por el que aspiro a substituir el inciso f) dice así en su segundo apartado: «También podrán celebrar con los mismos fines iguales convenios con empresas privadas o instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad, dando preferencia a las entidades que no persigan fines lucrativos».

Haré claro. Suprimo tanto para las familias como para las entidades con las que se puede contratar, aquello de que los futuros agricultores «provenzan de regiones de fácil asimilación al medio argentino», por una razón que daré. Me parece que eso es materia de regla-

mentación, de discernimiento del poder administrador en el momento en que recibe las ofertas o inicia las gestiones para lograr la inmigración de familias extranjeras. Se desearían, sin que sea necesario establecerlo en la ley, a aquellos inmigrantes procedentes de nacionalidades que por razones de raza, de educación, de hábitos, no sean fácilmente asimilables al medio argentino. Declaro, por lo demás, que en la mayoría de los casos eso no ocurre, porque tenemos experiencia de que el país absorbe y asimila toda clase de aportes inmigratorios, cualquiera sea su procedencia. Me parece antipático introducir en la ley esta disposición que acaso podría ser mal interpretada, cuando puede ser y es facultad del poder administrador, en cada caso, aceptar o rechazar familias o grupos de colonos, según sean sus condiciones, entre las cuales estarían la de ser, o no, fácilmente asimilables.

La segunda condición —yo le asigno importancia— es la de dar preferencia a las entidades que no persigan fines lucrativos. Este asunto de la colonización privada ha sido estudiada por organizaciones tan capacitadas como la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra, citada en sus exposiciones por los diputados Anastasi y Pinto, aparte de otros diputados.

En la «Revista Internacional del Trabajo», de Ginebra, se publicó en los años 1934-38 una serie de estudios notables sobre el estado de la colonización en varios países, entre los cuales se destacan particularmente la de los doctores Maurette y Siewers, sobre colonización en la Argentina, que también citó, me parece, el señor diputado Pinto.

Como consecuencia de una iniciativa de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Santiago de Chile, en 1936, esta organización preparó y convocó una reunión de técnicos sobre la cooperación internacional técnica y financiera en materia de migraciones colonizadoras, reunión que tuvo lugar en Ginebra, en marzo de 1938.

El informe que fué presentado a dicha reunión comprende un análisis muy profundo de los problemas de colonización, del cual considero oportuno destacar algunos puntos que me han servido de fundamento para articular esta pequeña disposición final.

Ese informe hace una distinción nítida entre la colonización por iniciativa de los gobiernos y la colonización por empresas privadas y llega a la conclusión de que la única colonización privada que podría dar resultado es la de empresas sin fines lucrativos, y de carácter social.

La citada conferencia, reunida en marzo de 1938, hizo suyo, en sus resoluciones, el punto de vista de que conviene que los gobiernos faciliten las tareas de esas empresas, en una convención que dice así: «Convendría impulsar y estimular los organismos privados que por sus estatutos, o participación del Estado o de institutos financieros de interés públicos, o por el control al cual están sometidos por disposiciones nacionales, den garantías de que los intereses del colono no serán sacrificados a fines comerciales». No me extenderé más, aunque podría seguir glosando los apuntes que he traído para fundar esta disposición.

Tenemos alguna experiencia nacional sobre los malos resultados de la colonización hecha con fines lucrativos. Una empresa colonizadora que se propone adquirir campos parcelados para venderlos con propósitos de ganancia, rara vez tiene en cuenta el interés público y no hace coincidir su interés particular, de carácter utilitario, con el interés nacional, con el cual frecuentemente está en conflicto. De ahí que me parece conveniente en esta ley, sin desear la posibilidad de celebrar convenios con entidades privadas que persigan fines lucrativos, dar preferencia a entidades que persigan fines no lucrativos y de carácter social. A ello responde el apartado final del artículo que someto a la consideración de la Honorable Cámara con la excelente intención que ha inspirado todas mis iniciativas en el curso del debate en particular.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Como este inciso f) se refiere a la población rural, yo propongo un agregado que posiblemente tendrá que llevar una nueva letra por razones de método. Es el siguiente: «Estudiar las condiciones de trabajo de los asalariados de la agricultura y someter a la consideración de los poderes públicos las medidas legislativas conducentes.» Declaro desde ya que en un brevísimo alegato verbal que hice ante la comisión he obtenido su conformidad; de suerte que las explicaciones que dé ahora serán sumarisimas.

En esta ley hay un personaje un poco olvidado. Ha pasado la figura del latifundista, del propietario, del pequeño propietario, del arrendatario; el único olvidado ha sido el asalariado de la agricultura. Conviene reparar la omisión, sobre todo si se tiene en cuenta la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo por el estudio del problema del asalariado en la agricultura, que la ha llevado a constituir una comisión permanente agrícola de la Oficina Internacional del Trabajo en 1938, cuya

comisión ha entregado a consideración de los estudiosos un volumen relativo a los problemas sociales de la agricultura. Debo citar un antecedente interesante. Hace 16 años el Ministerio de Agricultura, entonces desempeñado por el doctor Le Breton, se puso de acuerdo con la Facultad de Derecho de La Plata y utilizando los amplios ocios del personal de la Defensa Agrícola se preparó una interesante encuesta sobre la situación de los trabajadores de la agricultura. Y sospecho que el ministerio ha de estar preocupado ahora por el mismo móvil, porque le ha requerido a la facultad el envío de los antecedentes de esa encuesta.

Creo que el consejo agrario de colonización es el más capacitado, con los recursos de que va a disponer, para concurrir con el Poder Ejecutivo o con el Poder Legislativo, en la proposición de medidas tendentes a mejorar las condiciones de vida del asalariado de la agricultura. Con estos propósitos reitero a la comisión que acepte el agregado.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Kaiser). — La había solicitado el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Horne. — Pero si el señor diputado va a observar el inciso se la cedo.

Sr. Pizarro. — No, señor diputado; pero como entre las facultades para organizar la población rural se han omitido dos cosas interesantes, quería dejar expresado un concepto, sin proponer nada.

El éxodo de los campesinos en determinadas zonas sería muy conveniente que se incluyera expresamente o que la comisión lo tomara en cuenta en oportunidad. Y finalmente la situación de las capitales, de las grandes ciudades. Arbitrar los medios para que sus poblaciones concurren también a encauzar la situación agraria, ser distribuidos en el aforo.

Como se ve, no propongo nada; colaboro con la comisión.

Sr. Dickmann. — Pido la palabra.

No sé si la comisión aceptará la redacción propuesta por el señor diputado Guillot. Si así fuera, mi proposición sobraría; pero si no la aceptara, propongo que la comisión acepte la supresión de las palabras «y provengan de regiones de fácil asimilación al medio argentino». Esto significa entregar al consejo agrario una facultad de imponderable juicio. Es muy difícil determinarlo y puede prestarse a interpretaciones equivocadas y a intenciones «equivocas». Esta frase afea la ley. Si hay que seleccionar la inmigración, cabe adoptar una disposición en la ley de inmigración, pero no en ésta.

Espero que la comisión acepte esta supresión.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

La propuesta del señor diputado comprende varios puntos que se relacionan con la población y también con las necesidades de las diversas zonas agrícolas más fértiles y de los agricultores radicados en las zonas menos aptas. Es una facultad del consejo agrario nacional a la cual me referí especialmente cuando se discutió la ley en general.

En consecuencia la comisión no tiene inconveniente en aceptar este punto de vista contemplando la proposición que ha hecho el señor diputado Guillot y aceptando la redacción del señor diputado, siempre que se respete el encabezamiento del despacho. Quedaría redactado en esta forma: «f) Organizar la campaña para aumentar la población rural del país, contemplando también», etcétera. A continuación, exactamente, la disposición propuesta por el señor diputado Guillot.

No voy a entrar a hacer el análisis del propósito de la comisión al establecer esta facultad, que es muy clara y se refiere a un problema fundamental para el país. Entre ellos y principalmente el problema de hacer la campaña para aumentar la población rural, comprendiendo no sólo el problema de la inmigración, de entrada de inmigrantes, sino también llevar al campo, haciendo una campaña intensa, a los hombres jóvenes que quieran dedicarse a las actividades agrarias y que actualmente se encuentran concentrados en las ciudades. Podría referirme a este punto en forma amplia, pero no quiero hacerlo en esta oportunidad, porque ya lo he hecho en la discusión en general.

La comisión acepta también la proposición del señor diputado Pinto, entendiendo que, dado que el gobierno argentino está adherido a la Sociedad de las Naciones, esta cláusula no hace más que estipular, a mayor abundamiento, la acción que deberá desarrollarse en combinación con ese organismo internacional, especialmente con la comisión de inmigración, constituida hace poco, acción indiscutiblemente interesante para encauzar algunas corrientes emigratorias hacia los países de inmigración.

De manera que, con estas observaciones, la comisión acepta el agregado en la forma que he expuesto.

Con relación al agregado del señor diputado Anastasi, la comisión lo acepta, incluyéndolo como inciso g).

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿La comisión acepta la substitución de su inciso, por el del señor diputado Guillot?

Sr. Horne. — La comisión acepta en la forma que he expuesto. El inciso comenzaría así: «Organizar la campaña para aumentar la población rural del país contemplando, también, la necesidad de...»; luego vendría íntegramente lo que propone el señor diputado Guillot. Y a continuación de la proposición del señor diputado Guillot, iría el agregado del señor diputado Pinto.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a leer cómo quedaría el inciso *f*).

—Se lee:

«*f*) Organizar la campaña para aumentar la población rural del país, contemplando, también, la necesidad de trasladar a zonas agrícolas más adecuadas a los agricultores radicados en zonas menos aptas.

«Celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias agricultoras residentes en el extranjero, para radicarlas en la República, mediante contratos de compraventa o de arrendamiento, con sujeción a las condiciones establecidas por esta ley. También podrá celebrar con los mismos fines, iguales convenios con empresas privadas o instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad, dando preferencia a las entidades que no persigan fines lucrativos.

«Y establecer relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, por intermedio de su consejo de administración, a fin de convenir la mejor manera de establecer y radicar en las zonas de colonización a agricultores inmigrantes.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el inciso *f*).

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (González Bororino). — El nuevo inciso propuesto por el señor diputado Anastasi: «Estudiar las condiciones de trabajo de los asalariados de la agricultura y someter a la consideración de los poderes públicos las medidas legislativas conducentes».

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Cisneros. — Pido la palabra.

Después del inciso aprobado, propondría que se agregara el siguiente: «Acordar con la Dirección General de Inmigración el desembarco directo del colono en los puertos más cercanos a las zonas destinadas a su radicación».

He hablado con los miembros de la comisión y en principio lo han aceptado.

Si el consejo agrario va a estudiar distintas corrientes de colonización, es probable que una de ellas sea hacia territorios que estén cercanos a un puerto, que es en realidad la cabeza de una vasta zona de influencia. Lo lógico es que

el colono sea desembarcado en ese puerto más cercano al lugar de su radicación y no en puertos próximos a grandes ciudades que lo absorben. Hay casos prácticos ocurridos en ese sentido. Me bastaría citar el del célebre novelista español, que escribió después sobre ese asunto, y que dirigió distintas corrientes de colonización: una en la provincia de Entre Ríos y otra en el Sur del país. Se quejaba de que después de grandes trámites para lograr que vinieran colonos, eran desembarcados en la Capital Federal y se quedan absorbidos por ella. El dice que se le escapaban de sus propias manos.

Creo que bastan estas pocas palabras para que el inciso sea aceptado por la comisión y la Honorable Cámara, dado el sentido práctico que lo informa.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

El propósito que expresa el señor diputado es que los inmigrantes desembarquen en los puertos de la República vinculados a las zonas donde van a ir definitivamente. Ese propósito puede tropezar con el inconveniente de que los barcos que traigan a esos futuros colonos vengán con destinos que no sean los puertos que convengan. Creo que el punto de vista del señor diputado puede quedar consignado para que lo tome en consideración el consejo agrario.

Sr. Ravignani. — Se entiende que es de acuerdo con las posibilidades del tráfico.

Sr. Cisneros. — Las palabras del señor miembro informante, al quedar como traducción de un propósito plausible y práctico, creo que en realidad bastan, y no hago hincapié en mi proposición para que se vote.

Sr. Presidente (Kaiser). — Corresponde tratar el inciso *g*), que pasa a ser *h*).

—Sin observación, se vota el inciso *g*), que pasa a ser *h*), y resulta afirmativa.

—Se vota el inciso *h*) que pasa a ser *i*), y resulta afirmativa.

Sr. Iriondo. — Hago indicación de que inciso o artículo que no sea observado, se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, así se hará.

—En consideración el inciso *i*), que pasa a ser *j*).

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Con mi brevedad habitual trataré de fundar la proposición modificatoria de este inciso.

Sostuve en la discusión en general que este inciso era diminuto, porque no contemplaba en todo su alcance el problema de la enseñanza rural vinculada con la colonización. Y propongo ahora en reemplazo del despacho de la comisión el inciso siguiente: «Orientar y propender con la colaboración del Consejo Nacional de Educación y de la Dirección de Enseñanza Agrícola del Ministerio de Agricultura, el desarrollo de la enseñanza impartida por las escuelas rurales para obtener la formación de la capacidad técnica de los agrarios y de sus hijos, promoviendo a tal fin la creación de colonias escuelas y de especialización agraria».

La Cámara puede votar con confianza este inciso que contempla el punto en toda su extensión, vincula la acción de la colonización con la política educativa del Consejo Nacional de Educación mediante las escuelas rurales y tiende, en la medida de lo posible, a la formación de las colonias escuelas y de especialización agraria.

Con este alcance modesto, pero de colaboración práctica, y para fijar una orientación a la colonización vinculada con la política rural de formar colonos, someto esta proposición a la comisión y a la Cámara.

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Horne. — Pido la palabra.

La comisión no acepta esta proposición. El Consejo de Educación y la Dirección de Enseñanza Agrícola del Ministerio de Agricultura tienen facultades para desarrollar su acción en todo el país y la tendrán también en la forma que lo expresa la ley para fundar las colonias. Por ejemplo, se establece que en cada colonia debe haber una escuela rural y una dirección técnica. La enseñanza rural que se establece en el inciso i), es de otro carácter que el de la enseñanza general que imparte el Consejo de Educación y la Dirección de Enseñanza Rural. La función del consejo agrario será orientar los grupos de colonos hacia la enseñanza que pueda dar su personal técnico, a los agricultores e hijos de agricultores en esas nuevas colonias, según la experiencia que existe en el país, en la legislación de algunas provincias, como la de Entre Ríos por su ley de transformación agraria. Pero no creo conveniente que se implante dentro de la ley este sistema de establecer una obligación, que por lo demás, ya tiene, entre las facultades del consejo agrario, la de

requerir la realización de una acción en materia de educación primaria o técnica con los organismos del Ministerio de Agricultura. Por un artículo posterior esos funcionarios del Ministerio de Agricultura están obligados a colaborar con el consejo agrario. Esto me induce a mantener, en nombre de la comisión, la redacción del despacho actual.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Deploro no haber merecido la aceptación de la Comisión de Legislación Agraria y mi instancia ahora va dirigida a la Cámara. Para ser breve, solicito que la Secretaría proceda a dar lectura al inciso propuesto por la comisión y de inmediato al que yo propongo. La Cámara optará entre uno u otro.

Antes de terminar quiero significar que tan fundamental es establecer un plan de colonización, como crear o despertar aptitudes a base de una acertada educación rural.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Entiendo que dentro del artículo de la ley, éste es uno de los incisos más interesantes e importantes, pues tiende a orientar una política demográfica llevando la instrucción a las poblaciones rurales.

He tenido ocasión de comprobar personalmente cómo funcionarios técnicos del Ministerio de Agricultura —y lo declaro ante el señor ministro del ramo— han concurrido con gran eficacia a los establecimientos de enseñanza primaria del Consejo Nacional de Educación a impartir a los niños concurrentes nociones aplicables a las faenas rurales. Con gran entusiasmo e interés esos niños aceptan la enseñanza que le dan los referidos técnicos del Ministerio de Agricultura.

Estoy de acuerdo con el pensamiento de mi colega de representación. Creo que el Ministerio de Agricultura debería organizar esa colaboración de manera permanente con el Consejo Nacional de Educación.

Sr. Pinto (h.). — Es lo que propongo.

Sr. Ravignani. — Esta sería la manera de salvar a la instrucción primaria en los centros rurales, de la grave crisis porque atraviesa. Precisamente esta disposición de la ley encamina a una política educacional. Y por estas consideraciones creo que la comisión debería aceptar lo propuesto por el señor diputado Pinto, como forma de concretar la acción del consejo agrario, que será de grande importancia, con el Consejo Nacional de Educación, que tarda bastante en resolver un aspecto del problema educacional que reclama urgente solución.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Voy a adherir a la indicación formulada por el señor diputado Pinto. Hay un hecho objetivo y gráfico en la vida de las colonias: Llegado el momento de la cosecha, los padres, habitualmente, utilizan a todos los miembros de la familia, incluso los hijos que concurren a las escuelas primarias. De modo que en esas circunstancias se produce la deserción de esos niños de las escuelas. Este hecho revela la vinculación entre el problema agrario y el educacional. Sin entrar en otras consideraciones, voy a votar el artículo propuesto por el señor diputado Pinto.

Sr. Pandolfo. — Pido la palabra.

Yo votaría con entusiasmo la proposición que ha formulado el señor diputado Pinto porque encierra realmente un concepto en materia de política educacional digno de imponerse, como muy bien lo ha dicho el señor diputado Ravignani; pero no creo que sea en este momento que deba considerarse ésta.

El problema de la escuela rural está actualmente en una situación especialísima, y para resolverlo no basta solamente el cambio de la orientación pedagógica actual de la escuela primaria del campo. Se necesitan elementos de carácter técnico que han de llegar a su debido tiempo y por eso creo, como lo ha dicho el señor miembro informante de la comisión, que sería complicar las funciones del consejo que tiene que manejar esta ley, con un asunto que fuera de su realización y si bien es de cierta incumbencia por los propósitos doctrinarios y civilizadores de la ley, no lo es para esta junta, cuya obligación primordial está en formar colonias y en radicar en el país hombres que vengán a trabajar la tierra.

Creo que esta cuestión, que se ha promovido en una forma un tanto tangencial, es un excelente antecedente para cuando tengamos que considerar la orientación de la escuela rural y el país otorgue a esta escuela los medios indispensables para la gran transformación que está reclamando y que ha sido propuesta por hombres e instituciones que han estudiado a fondo esta materia.

Sr. Cisneros. — Pido la palabra.

Voy a adherirme a la proposición del señor diputado por la Capital y quiero dar este solo antecedente.

No estamos en presencia de algo hipotético que nunca se haya experimentado en nuestro país. Existe en la provincia de Buenos Aires, en Chascomús, una escuela experimental que asocia la instrucción primaria con la instrucción

agraria del alumno. Ha dado extraordinarios resultados y tiene 25 años de experiencia.

No es imposible, entonces, la coordinación de esos dos aspectos. Por el contrario, tiende a la formación integral del verdadero colono argentino.

Con estas solas palabras pido a los señores miembros de la comisión que reaccionen sobre su cerrada negativa, y así van a incorporar a la ley algo beneficioso para el país.

Sr. Osorio Soler. — Pido la palabra.

El problema de la educación en los medios rurales, en toda nuestra campaña, es un problema vasto y complejo cuya solución debe dejarse librada a las autoridades educacionales.

En general, la armonía entre el consejo nacional agrario y el Consejo Nacional de Educación a los fines de la enseñanza rural, está contemplada en el despacho de la comisión, que no requiere modificación.

Introducir una modificación, señalando un proceso único para la solución del problema educacional, estableciendo la construcción de colonias escuelas, es contemplar uno solo de los aspectos y no en forma integral como debería hacérselo en las zonas rurales.

Con estas palabras y teniendo en cuenta que no radica solamente el problema de la educación en la construcción de colonias escuelas, sino que es un problema múltiple que debe contemplar la edificación escolar, el mobiliario, el material didáctico, la capacidad técnica del maestro, la distribución de la población y todos los otros factores que inciden para disminuir el nivel educacional en las zonas rurales del país, voy a votar el despacho de la comisión y en contra del agregado propuesto por el señor diputado por la Capital.

Sr. Saccone. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Kaiser). — La había solicitado antes el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Saccone. — Iba a hacer moción de cerrar el debate, pero la diferí para después de que haya hablado el señor diputado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Horne. — Pido al señor diputado autor de la moción que suspenda su proposición para cuando entremos al capítulo X, que trata de la organización de las colonias. La comisión, que es permeable a todas las iniciativas, podrá recoger entonces, y tal vez darle alguna forma a la idea del señor diputado.

Si perciben los señores diputados cuál es el régimen de esta ley, podrán darse cuenta de que desaparecerá, de acuerdo a esta ley, la explotación de tipo individual. Se crea el núcleo colonia. En consecuencia, esa terminología de escuelas colonias, etcétera, será innecesaria. En realidad cada colonia será una escuela colonia, porque si leen los señores diputados el artículo 33, se darán cuenta de cuál es el régimen de la organización de los núcleos colonias que tienen el carácter social integral, que no sólo persiguen la enseñanza primaria, sino también la enseñanza técnica, la cooperativa y la organización de los agrarios. Posiblemente allí podríamos contemplar el problema planteado por el señor diputado por la Capital, que le pido lo suspenda. Esta comisión estudiará la proposición del señor diputado para cuando entre a considerarse esa disposición.

Sr. Pandolfo. — ¿Si me permite una interrupción el señor diputado?

El motivo que trae el señor diputado Pinto es interesante desde todo punto de vista. Refleja una necesidad para encarar decididamente la política de la escuela primaria rural, diré más, procura buscarle una solución al complejo problema. Creo que ha llegado la hora de que el Congreso ventile este asunto fundamental. Porque es evidente que la escuela rural está en crisis. Pero no pienso que sea este el momento de formular una proposición de esta naturaleza. Estamos tratando una ley de colonización, por la cual se crea un consejo agrario al cual se le otorgan facultades y limitaciones consignadas en este artículo que discutimos. Este consejo tiene una función determinada y debe llenar como instrumento creado por la ley, requisitos cuya trabazón y vinculación están todos relacionados a un propósito, que es el de colonizar, formar agrupaciones de hombres que se dedican al trabajo de la tierra. La función de educar, de orientar un aspecto de la enseñanza, es compleja y técnica y debe estar en manos de los organismos autorizados para realizarla. La crisis de la escuela rural se percibe, pero su solución es compleja porque reclama, no sólo un factor, sino la consecuencia de muchos factores. Hay que empezar a dotar a las escuelas de maestros capacitados para llevar a cabo una tarea que no es la tarea docente habitual, quiero decir que deben tener una especialización en los asuntos no muy sencillos que se relacionan con la agricultura: cultivos, semillas, maquinarias de trabajo, alambrados, útiles de labranza, animales necesarios

para el trabajo y la producción, etcétera. Será menester modificarla en forma tal que estas escuelas sirvan para producir una influencia real en el ambiente donde actúan, vale decir, que deben modificar el medio y no como ocurre actualmente que es el medio el que ha vencido a la escuela.

Tal vez en la oportunidad, que más adelante se señale, cabría colocar la redacción formulada como un mandato de la ley en el sentido de que las escuelas rurales deben tener la orientación técnica que el Congreso le marca.

Sr. Saccone. — Retiro mi moción; porque creo que el señor diputado Pinto va a retirar su proposición.

Sr. Pinto (h.). — Para dar término a esta discusión y atendiendo las palabras del señor miembro informante, retiro mi proposición para presentarla en la oportunidad en que se contemple el artículo a que acaba de hacer mención.

Sr. Pandolfo. — Debiera quedar como una orientación general, señor diputado.

Sr. Pinto (h.). — Debo agregar que este asunto no es una improvisación y que no me han convencido en absoluto algunas opiniones expresadas en el curso de esta discusión.

Sr. Eytó. — Debo significar que soy autor de una proposición a encuadrarse dentro del capítulo X, referente a la formación de colonias escuelas, que para mí es distinta de la disposición del inciso que se discute.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

Lamento que el señor diputado Pinto haya retirado el inciso que ha propuesto, pues le doy gran trascendencia a la vinculación que pueda tener el consejo agrario nacional con el Consejo Nacional de Educación.

Evidentemente la enseñanza que se da en nuestra campaña —y lo he dicho en la discusión en general del proyecto— no tiene sino directivas absolutamente urbanas. El niño de nuestra campaña es enseñado al igual que el de nuestras ciudades: no se le despierta ninguna inquietud agrícola, no conoce ninguno de los preceptos que deben animarlo durante su vida para poder trabajar y hacer rendir el esfuerzo que realiza.

Por eso creo que si el Consejo Nacional de Educación se mantiene en vinculación con el consejo agrario, como lo propone el señor diputado por la Capital, existirá ya un propósito manifiesto de que esa instrucción en el sentido agrario sea realizada en todo el país.

Por eso me adhiero a la indicación de agre-

gar el inciso propuesto, porque le doy una gran importancia y porque creo que es absolutamente y diferente de lo que el señor diputado Horne y la comisión proponen en el artículo 33 a que el mismo se ha referido.

Sr. Pinto (h.). — Con las palabras del señor ministro queda agregado un argumento más en favor de la conveniencia de esta proposición, pero como no deseo obstaculizar la sanción de la ley, ruego al señor presidente se digne disponer que por Secretaría se tenga en cuenta esta proposición para cuando llegue el artículo a que se ha referido el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Horne. — Señor diputado: la comisión va a estudiar con el señor diputado la mejor redacción, que esté de acuerdo con los términos y el espíritu de la ley.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el inciso i), que pasa a ser j).

—Resulta afirmativa.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Voy a proponer un nuevo inciso que tal vez sea coincidente con la proposición que han hecho los señores diputados Pinto y Anastasi.

El artículo 7º tiene por objeto establecer todas las funciones del consejo agrario nacional. Entiendo que debemos incorporar un inciso para determinar que dentro de sus funciones está la de crear escuelas colonias, con el objeto de capacitar técnicamente a los colonos.

En la discusión en general me detuve especialmente en esa gran masa de población rural argentina que parece desechada definitivamente, sin comprender que están en ella las grandes reservas del país para los propósitos de la población perseguidos fundamentalmente con este proyecto.

Considero, señor presidente, que no cumplirá sus funciones la ley de colonización si no crea los organismos tendentes a capacitar técnicamente a esas masas rurales —que no podrían ser trasladadas de inmediato a la explotación granjera— sin crear en ellas el espíritu de pequeños propietarios.

Dada la situación de esas masas y los propósitos perseguidos, hay la necesidad de un organismo habilitador y ese organismo debe ser la colonia agrícola, organizada con un concepto cooperativo, distinta a la colonia del artículo 33 que supone ya un colono en condiciones de proceder como propietario y de atender su explotación agrícola con suficiente capacidad técnica.

Propongo un inciso que diga lo siguiente:

«Establecer colonias con el objeto de capacitar técnicamente a los futuros colonos».

En la discusión erudita del artículo 1º se mencionó una serie de antecedentes europeos y se aventuró un juicio que me parece excesivo, con respecto a los esfuerzos que realizaron las nacionalidades nuevas para asentar sus poblaciones rurales en propiedades que pertenecían a los que, como consecuencia de la creación de tales nacionalidades, tenían el carácter de extranjeros y eran sin embargo propietarios de toda la riqueza fundiaria; se aventuró el juicio de que tales propósitos tal vez tengan consecuencias fatales, sin comprender que esas consecuencias fatales que están pesando sobre el espíritu de los hombres de todas las naciones, nada tienen que ver con este problema agrario, sino que obedecen a otros asuntos mucho más profundos, mucho más delicados, y que ojalá los hombres del mundo resuelvan pacíficamente sin recurrir a medios que signifiquen la destrucción de las grandes civilizaciones, de las cuales ha sacado la nuestra la mejor parte de su patrimonio cultural.

No me voy a referir a esos antecedentes europeos, sino a un precedente americano vinculado con situaciones parecidas a la nuestra. La ley chilena, citada en este debate, se preocupa especialmente del problema que estoy encarando. Y no podría ser de otra manera puesto que en Chile se producen los mismos fenómenos agrarios que entre nosotros y las soluciones que se articulen deben tender a los mismos objetivos. Hay en la ley chilena una serie de disposiciones —que he de reproducir oportunamente— tendentes a establecer el régimen de las colonias agrícolas.

Se me dirá que esta ley, dada la limitación de sus recursos, no estará en condiciones de resolver los problemas agrarios argentinos en la amplitud que nosotros quisiéramos; pero yo me atrevo a afirmar que si atendiéramos exclusivamente a los recursos que tendrá el consejo agrario según la ley, tampoco su acción podrá ser lo suficientemente eficaz dentro de los límites que le ha fijado la comisión, tendentes a la creación de la pequeña propiedad.

Entiendo que esta ley debe contener no solamente las previsiones tendentes a convertir al arrendatario en propietario, sino también los organismos que por vía de ensayo demuestren la posibilidad de realizar esa otra obra que es más trascendente: convertir en propietarios independientes a los padres de familia, para que no reciban un nuevo hijo como una boca más que ha de reclamar los menguados alimentos

de la familia, sino con la alegría de quien sabe que dentro del propio hogar existen los recursos necesarios para recibirlo como un bienvenido. Inspirándome en estos propósitos, entiendo que es necesario conferir al consejo agrario nacional la facultad de crear colonias y escuelas agrícolas para realizar así una gran experiencia de la que dudan muchos argentinos. En mis viajes al interior del país, he podido comprobar que muchos argentinos dudan de la capacidad de las masas rurales argentinas que forman el asalariado de las campañas, para desenvolverse dentro de otros horizontes una vez que se las haya capacitado técnicamente y se las haya puesto en condiciones de aspirantes a la propiedad de la tierra.

Considero que, dado el propósito que anima la inclusión de este inciso, él ha de merecer favorable acogida de la comisión, máxime cuando uno de sus miembros, el doctor Horne, en su anteproyecto se refería a esta cuestión en uno de sus artículos, consecuentemente con lo que enseña en sus libros acerca de los problemas del campo argentino.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

La comisión no acepta la proposición del señor diputado Fassi y voy a expresar brevemente los motivos por los cuales no accede.

La comisión comprende bien y se explica la preocupación de los señores diputados por todo lo que atañe a la educación de los pobladores de la campaña; pero no comprende bien el propósito que anima a orientar esa educación fuera de su sentido real y práctico.

La comisión entiende que el consejo agrario no puede transformarse en un consejo nacional de educación agraria. La función educacional debe estar a cargo de gente competente, de maestros, y la designación de estos maestros debe hacerse por la autoridad correspondiente.

Lo que este consejo puede y debe hacer es fomentar por todos los medios a su alcance la creación de escuelas donde ellas sean indispensables: ceder el local para instalarlas, ofrecer dinero para ese objeto, proporcionar útiles de jardinería y agricultura, etcétera; pero de ninguna manera le podríamos encargar las funciones múltiples y específicas que supone la creación de toda una red de colonias escuelas. Porque ni siquiera son escuelas, sino colonias escuelas.

De manera que propongo al señor diputado que pasemos por encima de esa proposición, reservándonos para más adelante la consideración de la forma de llevar a la práctica esa idea.

Propongo, pues, que votemos sencillamente el inciso en la forma que viene despachado por la comisión, teniendo en cuenta que ya se ha discutido largamente.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Deseo aclarar mi pensamiento. No se trata de escuelas para niños, puesto que ya nos hemos referido a la cuestión y la hemos resuelto con anterioridad. Se trata de colonias escuelas para aspirantes a colonos, para adultos, para padres de familia.

Sr. Repetto. — No es para impartir enseñanza agrícola.

Sr. Fassi. — Se trata de una cuestión distinta de la enseñanza agrícola, sino de colonias. Donde no se parcelará la tierra, y habrá una disciplina más estricta y una dirección técnica apropiada; donde vayan esas familias del interior que ha concretado el señor diputado en sus giras y que yo también he visto, que no están actualmente en condiciones de pasar al régimen de la pequeña propiedad. Se trata de imponderables valores humanos, de padres de familia con prole numerosa, que podrían así capacitarse técnicamente, adquirir hábitos de ahorro, acostumbrarse a las funciones propias de la granja y, sobre todo, formar el espíritu que yo llamaría de amor por la propiedad para radicarse definitivamente en la tierra que se les confiara posteriormente. Esa es la colonia que crea la ley de Chile, artículo 56 y siguientes, que la llama colonia de aspirantes a colonos; es decir, no establecer exclusivamente por la ley un régimen que lleve directamente al colono propietario, aunque sea mediante la existencia de un régimen contractual previo, sino que además existe el establecimiento de aspirantes a colonos que realiza una función de escuela de colonos para que cuando los aspirantes entren a cumplir su función de tales, tengan la adaptación moral y la capacidad técnica necesaria para desempeñarse bien.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Quiero decir breves palabras respecto a la proposición del señor diputado por la Capital.

Esta ley tiene por objetivo fundamental subdividir la tierra y entregarla en propiedad a los agrarios; tiene un fin económico y un fin social. Lo que propone el señor diputado en el sentido de crear colonias escuelas rurales con el objeto de impartir enseñanza técnica, es una aspiración que debe ser articulada por otras leyes, pues es una función que no puede estar a cargo del consejo agrario nacional.

Por esas razones, la comisión no acepta el agregado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital.

—Resulta negativa.

Sr. Fassi. — Pido que se rectifique la votación.

—Se rectifica la votación.

Sr. Prosecretario (Madero).—Negativa, contra 57 votos. Votan 93 señores diputados.

—Sin observación, se aprueban los incisos *j)* y *k)*, que pasan a ser *k)* y *l)*, respectivamente.

—En consideración el inciso *l)*, que pasa a ser *m)*.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Una publicación de la sociedad de ingenieros agrónomos ha hecho una observación a este inciso, que deseo aclarar para que todos los señores diputados puedan apreciar su verdadero alcance.

Dice el inciso: «Promover la aplicación del seguro agrícola mutuo u oficial...». Y dice bien el inciso. Mientras el Banco de la Nación no haya fijado las bases del seguro agrícola integral que el Congreso ha incorporado a la ley de crédito agrario, en estas colonias no habrá más recurso que aplicar el seguro mutuo, vale decir el seguro organizado entre agricultores y en beneficio exclusivo de los asegurados. El cumplimiento de esa disposición de la ley agraria está en retardo, tan grande que comienza a causarnos algún asombro. Ese retardo en parte es debido a la gestión insistente de las compañías privadas de seguro, que han podido hacer llegar su influencia hasta ciertas esferas oficiales. Cuando el Banco de la Nación haya superado todas estas dificultades, entonces se podrá hacer a un lado el seguro mutuo que puedan haber organizado los agricultores para apelar al seguro del Banco de la Nación. Por eso el inciso está bien como está.

En descargo de la responsabilidad del banco, cuya preocupación en esta materia me es conocida, debo decir que tal vez se trate de un estudio difícil y de engorrosa solución. Sé que existe una comisión parlamentaria que hace dos o tres años está estudiando el seguro mutuo integral: sé que ha gastado varios miles de pesos, 20.000 ó 30.000 en la remuneración de trabajos técnicos, pero nadie sabe aún las conclusiones a que ha llegado.

Sr. Amadeo y Videla (h.). — La comisión está estudiando ese arduo y difícil problema del seguro integral agrícola, que no está resuelto en ninguna parte del mundo. Esa es la razón que existe para no tener conclusiones definitivas.

Sr. Repetto. — Puedo dar a la Cámara un dato, que constituye un argumento para los que somos un tanto escépticos sobre la eficacia de ciertas comisiones parlamentarias. Diré que el Banco de la Nación, no obstante todas las dificultades habidas y por haber, técnicamente ha resuelto ya el problema, porque ha encargado su estudio a hombres competentes.

Sr. Amadeo y Videla (h.). — No sobre seguro integral.

Sr. Repetto. — Sí, señor diputado. Han dado una solución técnica para el seguro contra el granizo, la helada y la sequía. Pero hay influencias poderosas que traban la acción del banco y que han conducido a una decisión conciliadora: el Banco de la Nación seguirá estudiando un problema que ya tiene estudiado y resuelto. El banco asegurará sólo a los deudores para asegurarse él mismo sus créditos.

—El señor diputado Amadeo y Videla (h.) hace una interrupción que no alcanza a percibirse.

Es un hecho tan cierto como que nosotros estamos discutiendo este proyecto de colonización. Puedo asegurar al señor diputado que es un dato exacto y que eso no marcha porque hay presiones de empresas privadas que lo dificultan. Se trata, pues, de modificar un poco el espíritu que ha reinado hasta ahora, a objeto de que lleguemos cuanto antes a la solución, ya que sabemos que uno de los factores esenciales de salvación de la agricultura está, precisamente, en rebajar el costo de producción.

Sr. Presidente (Kaiser). — No habiendo observación, queda aprobado el inciso.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra, para proponer dos incisos nuevos, que son los siguientes. El primero: «Coordinar sistemas para el mejoramiento de las condiciones de la vida intelectual, artística y social de los trabajadores de la tierra»; el segundo: «Organizar el régimen de la asistencia médica rural».

Me parece que basta citar estos enunciados que cuentan en este momento con una amplia documentación que podrá utilizar el consejo agrario. En efecto, el Instituto Internacional

de la Cooperación Intelectual, ha presentado a la próxima conferencia de la vida rural de 1939 un hermoso estudio sobre los problemas intelectuales de la vida rural. Entiendo que la misión del consejo agrario debe también hacerse sentir desde este punto de vista, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores del campo.

Pido, pues, a la comisión acepte estos dos agregados que no contrarían en modo alguno las finalidades de la ley.

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Palacio. — La comisión no acepta.

Es muy loable el propósito del señor diputado, pero la comisión no puede aceptar y solicito que se sigan considerando los incisos de este artículo hasta terminar.

Sr. Anastasi. — Descarta que la comisión expresara cuáles son los fundamentos que tiene para rehusarse a incorporar preceptos tan elementales como los que en este momento son motivo de examen por todos los gobiernos en razón de la próxima conferencia de la vida rural que se celebrará en 1939; qué inconveniente serio puede existir para que el consejo procure la coordinación de sistemas para el mejoramiento de la vida intelectual, artística y social de los trabajadores de la tierra; qué artículo puede existir para rehusarse a que el consejo organice el sistema de la asistencia médica rural.

— Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita.

Los señores médicos que son diputados saben que no obstante las condiciones higiénicas de la vida rural, en ella el promedio de la vida es mucho menor que en las ciudades y ello se debe a la deficiente organización del sistema médico. ¿Cómo entonces la comisión puede rehusarse a incluir un tema como éste que debiera suscitar la preocupación del consejo agrario nacional?

Sr. Muniagurria. — Señor diputado: hay un despacho que lleva el número 177 de la Comisión Especial para la Ordenación del Sistema Sanitario en el País, que contempla los aspectos médicosociales y de asistencia a que se ha referido el señor diputado. De modo que estaría totalmente de más incluirlo aquí cuando, como digo, existe un despacho que está a la orden del día de la Cámara.

Sr. Anastasi. — Eso en cuanto a la asistencia médica, pero no con relación a las condiciones de la vida intelectual de los trabajadores.

Sr. Muniagurria. — Ese es otro aspecto.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

La comisión no puede aceptar la modificación propuesta por el señor diputado por la Capital porque, como ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, las facultades del consejo agrario son modestas y restringidas. Es indudable que lo mejor sería que el consejo agrario pudiera encontrar la solución a todas las necesidades de que el país adolece, que pudiera coordinar la atención médica de los agrarios, organizar salas de cinematógrafos, bibliotecas, canchas de deportes, pero todo eso podrá hacerlo después que haya llenado sus finalidades primordiales, como son las de subdividir la tierra y empezar a formar sus propietarios. No quiere este despacho conceder al consejo atribuciones para solucionar problemas más amplios y complejos porque entonces él no realizaría ni una ni otra cosa. Por estos motivos por las finalidades modestas y restringidas que tiene la ley, la comisión se opone a cualquier modificación de la naturaleza de las que ha propuesto mi distinguido colega por la Capital, a quien pido desista de ellas para que podamos continuar con el resto de los incisos.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Para facilitar la labor de la comisión y aun en la convicción de que está equivocada, retiro las dos modificaciones que he propuesto, entendiendo que la última de ellas está contemplada, según afirma el señor diputado por Santa Fe, en otra disposición del proyecto. En cuanto a la primera, cuando se contemple el aspecto de la educación, trataremos de insistir en ella.

Sr. Presidente (Pita). — Habiendo sido retiradas las modificaciones, corresponde votar el inciso.

— Se aprueba el inciso m), actualmente t).

— En consideración el inciso n).

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Voy a proponer un pequeño agregado que creo ha de aceptar la comisión, y consiste en incorporar al final del inciso lo siguiente: «por institutos similares extranjeros a argentinos que se hayan graduado en ellos como becados de la Nación o de las provincias».

Voy a fundar brevemente mi proposición. El país acostumbra a becar a estudiantes argentinos ante universidades extranjeras, sobre todo en materia agrícola, ganadera o industrial,

a fin de que se perfeccionen en esos centros especializados. Dejan de graduarse en nuestros establecimientos porque el Estado los ha becado, acordándoles así una distinción y un honor. Vuelven luego especializados y se encuentran con que, de acuerdo con esta disposición de la ley, no pueden intervenir en el curso.

Sr. Horne. — La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital.

Sr. Presidente (Pita). — Habiendo sido aceptado por la comisión el agregado propuesto, se da por aprobado el inciso en discusión, con dicho agregado.

—Sin observación, se dan por aprobados el inciso *a*) del despacho de la comisión, que

pasa a ser *p*); el inciso *p*), que pasa a ser *q*); el inciso *q*), que pasa a ser *r*), y el inciso *r*), que pasa a ser *s*), del artículo en discusión.

Sr. Labayen. — Pido la palabra.

Es indudable que la Cámara está fatigada después de muchas horas de trabajo, por lo que hago moción de que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

—Después de unos momentos de espera:

Sr. Presidente (Pita). — No habiendo número para votar, queda levantada la sesión.

—Era la hora 21 y 8.